

SENTENCIA.

PROCEDIMIENTO: TUTELA LABORAL

MATERIA: VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

DEMANDANTE: MANUEL ROBERTO PIZARRO TAPIA.

DEMANDADO: UNIVERSIDAD DE TALCA REPRESENTADA POR ALVARO ROJAS MARÍN.

RIT N° T-32-2019

RUC N° 18- 4-0154386-0

Talca, a seis de diciembre del año dos mil veintiuno.

VISTO.

Individualización de las partes litigantes. Que son partes en este juicio, en calidad de demandante Manuel Roberto Pizarro Tapia, Ingeniero Forestal, Dr. en Ingeniería, Profesor Titular de la Universidad de Talca, domiciliado en Carmen Covarrubias 260, Departamento 609, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana y en Carlos Gesswein N° 47, Condominio Jardín Esmeralda, comuna de Talca, representado judicialmente por los abogados doña María Mercedes Bulnes Núñez y don Roberto Antonio Celedón Fernández y como parte demandada Universidad de Talca, Corporación de Derecho Público, Rut N° 70.885.500-6, representada por su Rector, don Alvaro Rojas Marín, cédula de identidad N°6.224.494-1, ambos domiciliados en Quebec N° 415, Providencia, Región Metropolitana y en Uno Poniente N° 1141, comuna Talca,, asistidos en audiencia por el abogado don Mauricio Lozano Donaire y Mathias Ignacio Merlin Campos.

De la demanda, sus fundamentos y pretensiones. Que el demandante antes individualizado fundó su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que se exponen: Que circunstancias extraordinarias, de una persecución sin precedente a un académico, me obligan a accionar contra las actuales autoridades de la Universidad de Talca, en la cual soy docente desde el año 1989 y en la categoría de Profesor Titular desde el año 2011. Esta persecución comienza una vez que el actual Rector, Alvaro Rojas Marín, es reelecto en esa función y luego de reasumir su cargo por un nuevo mandato, en marzo de 2018.

El origen de tan injustificada y desproporcionada persecución en mi contra es una carta al Director, que dirigí al diario El Centro, el 26 de diciembre de 2017, reflexionando sobre una de las lecciones que dejaba la elección parlamentaria de fines de ese año en cuanto sancionar la reelección permanente, lección que estimaba igualmente válida para la elección de Rector que se avecinaba en nuestra universidad



regional, pues de ir a la reelección quien ejercía tal responsabilidad -como lo fue- completaría un total de 28 años en el mismo cargo.

En toda mi historia académica y profesional nunca había sido sometido a un sumario. Sin embargo, en el curso del presente año 2018 se ha ordenado, por las autoridades que controlan la universidad, instruir tres sumarios en mi contra, en uno de los cuales, iniciado como investigación sumaria, el Fiscal nominado solicitó el sobreseimiento pero las actuales autoridades sin más cambiaron de Fiscal y al nuevo le ordenaron instruir sumario directamente. De este modo, un instrumento excepcional de carácter sancionatorio se ha utilizado como un medio de abuso de poder con todo lo que ello conlleva en cuanto concertación previa entre personas, manipulación de medios y gastos de recursos por quienes abusan y de tensión intelectual y emocional para quien es perseguido.

La persecución resulta más agobiadora de lo que podría pensar, tanto en lo personal como familiar. Pero tengo el deber de hacerle frente porque creo en lo que alguien sabiamente alguna vez nos dijera que "en uno están todos", o, en palabras de Montesquieu, "una injusticia hecha al individuo, es una amenaza hecha a toda la sociedad".

Como dije, la persecución en mi contra, constitutiva de acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales se inicia con la instrucción, lisa y llana, de un sumario administrativo, ordenado por el Rector Alvaro Rojas, que me imputa una falta por haberse publicado en el espacio periodístico de 'Carta al Director', en el diario El Centro, el 26 de diciembre de 2017, un artículo de Opinión que suscribí, que el medio tituló "Renovación de Rectores" y que me permito reproducir;

Sr. Director: Lo que la ciudadanía expresó transversalmente en estas elecciones es el deseo de renovación de sus representantes y liderazgos, la incorporación de nuevos rostros y una mayor valoración de los aspectos éticos en el accionar de las autoridades.

En las universidades públicas que mantienen los estatutos de 1981, con mínimos cambios, con excepción de la Universidad de Chile, hay Rectores que ejercen el cargo por más de dos décadas. Hoy varias universidades se preparan para una nueva elección de Rector.

En la Universidad de Talca, al parecer ni la Junta Directiva, ni el Rector Alvaro Rojas, ni sus adherentes, han escuchado lo que la ciudadanía expresó en las recientes elecciones. ¿No le parece Sr. Director que 28 años no es algo recomendable, ni ético, ni democrático?



Dada la enorme concentración de facultades en la figura del Rector, es sabido que se practica el clientelismo a niveles impúdicos, influyendo elecciones con listas de adherentes, construidas con la presión del poder y que atentan contra la dignidad de los electores. Así, se hace muy difícil el juego democrático, porque el Rector en ejercicio no encuentra oposición suficiente y no se da el debate necesario.

Cualquiera sea la circunstancia, no es aceptable que una institución perteneciente al Estado, sea capturada indefinidamente por una persona o un grupo de poder. Simón Bolívar decía que "nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía"

Aunque a algunos parece no importarles esta situación, creo que es mi deber como ciudadano, profesor titular y ex alumno de la educación pública, en el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, hacer un llamado de atención sobre esta práctica que atenta contra los valores democráticos de la República y los valores que una universidad del Estado debiese representar.

Esta opinión, que emití en el ejercicio de un derecho humano fundamental como es la libertad de opinión, sin censura previa, ejercido dentro del ámbito de mi libertad personal, fue el origen y causa de que se me estigmatizara, persiguiera, censurara y, en definitiva, se me sometiera a un procedimiento disciplinario, el que se ordena instruir el 12 de abril de 2018 por el Rector Alvaro Rojas.

Este sumario fue acompañado por una seguidilla de rumores y otras manifestaciones que enrarecieron el ambiente, buscando crear un clima de enemistad hacia mi persona, entre mis colegas y buscando desprestigiarme a nivel de la Facultad de Ciencias Forestales, donde trabajo.

Este sumario indebido y arbitrario, al menos lo es por actos propios que dan cuenta de convicciones personales que jamás pensé que podría dar origen a un sumario, pero son mis opiniones. Sin duda, es una notificación a toda voz crítica que piense sobre la universidad y sus autoridades. Aquí se llegará a un clímax jurídico insuperable como sinónimo de la arbitrariedad misma: la persona criticada (Rector) ordenará instruir sumario y será el mismo (Rector) quien dictará la resolución sancionatoria.

Pero los sumarios que vienen, tan insospechados como el primero, superan todo límite de lo imaginable y dan cuenta de una odiosidad y absurda inquina sobre mi persona como académico, que la(s) autoridad(es) más altas de la universidad alimentan como otra forma de represalia a las opiniones manifestadas por mi persona.



Del segundo acto persecutorio tuve conocimiento de la forma más inesperada y agravante. Es de público conocimiento que hubo manifestaciones, incluida tomas, de universidades por movimientos de definición feministas. En Talca, hubo una larga toma desde el 31 de mayo al 9 de julio de 2018, y se levantaron demandas propias del movimiento y algunas otras en relación a la Universidad. Una de ellas pidió disculpa de solo hacer referencia a ésta fue que se levantara el sumario en mi contra. Las autoridades estudiantiles responsables de la Toma obtuvieron ser recibidas por el Consejo Académico de la Universidad, en forma Extraordinaria. Ello ocurrió el 7 de junio de 2018. Al pronunciarse sobre las demandas concretas del movimiento, informó el Rector y la Secretaria General de la universidad que no se podía acceder a la petición de levantar el sumario al Profesor Pizarra porque se estaba instruyendo un sumario por "abuso de poder contra una estudiante". Y ello quedó en Acta de ese Consejo Académico Extraordinario.

Yo no tenía idea de tal hecho!, y la pregunta, sin respuesta por largo tiempo, era de quién, por qué, quién podría haber formulado una tal denuncia.

De este segundo procedimiento disciplinario tomo conocimiento formal el 20 de julio, un mes y medio después de esa sesión Extraordinaria del Consejo Académico, al ser citado por el Profesor Carlos Padilla, como Investigador de una investigación sumaria. El hecho es patético y dice relación con una estudiante que sustrajo dos Pruebas desde mi computador en diciembre de 2017, hecho del que tomé oportunamente conocimiento y que informé al señor Decano. Este hecho se trastrocó completamente y se ordenó una investigación sumaria en mi contra por un supuesto abuso de poder contra la alumna. El Investigador, Profesor Padilla, pidió el sobreseimiento de esta investigación.

Sin embargo, posteriormente, a instancias de Ricardo Sánchez Venegas, Director de Asuntos Jurídicos de la universidad, sin solicitarse la reapertura de la investigación sumaria con diligencias concretas, el Rector con fecha 27 de agosto de 2018, ordenó derechamente instruir sumario, nombrando un Fiscal. El nuevo Fiscal, profesor Raúl Carnevali, con fecha 6 de diciembre de 2018 formula cargo en mi contra por abuso de poder respecto de esa estudiante, el que consistiría en advertirle que podía ser sancionada gravemente por esa falta, aconsejándole que pidiese disculpas a sus compañeros de curso quienes conocían su responsabilidad en el hecho. En atención a que la alumna por el hurto informático me pidió excusas formales, señalándome que se sentía muy avergonzada y que pensaba abandonar la universidad, le aconsejé que les pidiese disculpas a los estudiantes por este hecho. Cuando ella le escribe a los alumnos, conversé con ellos para que aceptasen las excusas, que fue un grave error



de ella, pero que todos nos podemos equivocar en la vida y lo importante es aprender de ello para ser mejores. La estudiante, según se me ha dicho, ha negado toda responsabilidad en cuanto a tener la calidad de denunciante en mi contra. Y esto efectivamente es así. La intriga nace de académicos de la propia Facultad de Ciencias Forestales, adherentes de la candidatura del actual rector Alvaro Rojas y en el contexto del desarrollo del primer sumario aparece esta petición de un nuevo sumario sobre "abuso de poder", imputación completamente falsa e injuriosa.

El tercer sumario ordenado en mi contra linda en lo más bastardo que se pudiese imaginar, menos aún respecto de quienes tienen formación académica. Su instrucción se habría ordenado con fecha 10 de septiembre de 2018, tomando conocimiento de su existencia solo el 24 de octubre pasado, tras un correo electrónico dirigido a mi persona por el actuario designado para concurrir a declarar el 30 de ese mes ante el Fiscal Iván Palomo.

Si el segundo es insólito, este tercer sumario linda simplemente con lo escandaloso. Tiene su origen en una carta que un académico, Prof. Francisco Zamudio, escribió al Rector Alvaro Rojas, relatándole una conversación privada que había tenido conmigo y en la que yo habría dicho que Alvaro Rojas y Ricardo Sánchez serían "delincuentes". Este hecho es enteramente falso. La conversación efectivamente existió y como Zamudio, a quien conozco desde que ingresé a la universidad, comentó "que sería inmoral que yo fuese decano porque tenía dos sumarios", en circunstancias que sólo se conocía el primero, le pregunté sobre este hecho y en el marco de una conversación absolutamente personal y privada le señalé que sentía que Alvaro Rojas y Ricardo Sánchez "me tratan como si fuese un delincuente". El día 30 de octubre del presente año (2018), en el marco de mi declaración en este tercer sumario administrativo tomé conocimiento de la carta que el señor Zamudio escribió al Rector comentándole el diálogo sostenido conmigo, con una serie de consideraciones descalificadoras sobre mi persona. La instrucción de este nuevo sumario la ordenó en calidad de Rector subrogante y por instrucción de una Directora jurídica subrogante, el Vicerrector Académico de la Universidad, don Claudio Tenreiro, nombrando Fiscal al Profesor Iván Palomo, un sumario moral y jurídicamente gravísimo pues invade la dignidad y privacidad de las personas y que tiene su origen en expresiones completamente maledicentes.

Si bien los sumarios administrativos tienen su propio conducto de resolución y fiscalización en sede administrativa, en paralelo a todo ello, pero en coherencia con el cuadro de persecución, he sido víctima de otras formas de acoso y discriminación: soterradamente he sido vetado en las noticias que entrega la Dirección de



Comunicaciones de la Universidad, que tiene una amplia plataforma comunicacional tanto radial, audiovisual, digital como escrita, dirigida tanto a la comunidad universitaria como a toda la comunidad local y regional, lo que se expresa, por una parte, en el término de mi colaboración en un programa radial en donde realizaba comentarios académicos sobre diversos temas, desde hace más de 10 años, y, por otra, se demuestra en que diversas apariciones en prensa como académico o en relación a investigaciones relativas a Hidrología no fueron difundidas, en circunstancias que es una práctica extendida de así hacerlo. Asimismo, no son publicitadas noticias referidas a mi persona, en los medios noticiosos de la universidad, discriminación que nunca antes había sufrido. ¿Cómo se podría explicar que por la Universidad no se difunda un hecho que la honra entre todas las universidades chilenas como es haber sido distinguidos por la Unesco, en abril de 2018, al adjudicarnos la cátedra de Hidrología de Superficie, y cuyo director soy yo, siendo la primera cátedra en Hidrología, con esta distinción internacional? No sólo la noticia relativa a la Cátedra Unesco no fue difundida sino que tampoco lo fue la distinción entregada este año 2018 por la Corporación Chilena de la Madera, que me nombra como Investigador Destacado del año 2017, por mis trabajos en Hidrología Forestal. Para qué decir sobre Seminarios académicos internacionales que me ha correspondido participar tanto en Chile como en el extranjero.

Pareciera reeditarse una vieja y mala práctica de quienes ostentan posiciones de poder, al pretender 'invisibilizar' o 'eliminar' a quienes consideran enemigos u adversarios, práctica que llegó a extremos inconcebibles en nuestro país en el pasado inmediato. Por la vía de esta inédita persecución, instruyendo por doquier sumarios injustificados y arbitrarios contra mi persona, se persigue seguramente pre-constituir un cuadro que permita a "la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario".

Es lo radicalmente opuesto a una cultura de respeto a la dignidad de las personas dentro de las diferencias, de la tolerancia en la diversidad, al fin y al cabo de una cultura verdaderamente democrática y republicana. Si en una Universidad no hay libertad de pensamiento, si no hay una libre circulación de las ideas, de posiciones, si se sofoca el pensamiento crítico se está afectando su ser esencial. Al ejercer esta acción tutelar, derecho que la ley me reconoce, miro más allá de mi propia persona, el abuso, la dominación y la sumisión doblega la dignidad humana. El temor, el miedo, deforman la cultura, que solo florece cuando se respiran vientos de libertad.

Por ello, la presente acción laboral se ejerce en el estricto marco de la competencia que el artículo 485 del Código del Trabajo define respecto de la Tutela Laboral,



incorporada a nuestro ordenamiento jurídico el año 2005. Por esta vía tutelar se expresa el principio de la supremacía constitucional, como norma obligatoria y plenamente vigente en las relaciones laborales, cualquiera sea la naturaleza de ésta, sea pública o privada, e incluso respecto de organizaciones internacionales. El procedimiento de Tutela Laboral, de acuerdo a la citada disposición legal señala:

"se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números I, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4o, 5o, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6o, inciso primero, 12°, inciso primero y 16°, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador"

"También se aplicará este procedimiento para conocer los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2o de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto".

"Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial..."

En los hechos que se denunciarán concurren los tres requisitos que estipula la ley:

1. - Se refiere a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales;
2. - Se afectan derechos fundamentales del trabajador en relación a aquellos en que la ley expresamente se remite a la Constitución Política, más la prohibición de discriminación, los cuales han resultado afectados o lesionados por el empleador; y
3. - Que los derechos fundamentales resulten lesionados con motivo del ejercicio de las facultades del empleador sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.

Este nuevo instituto procesal laboral ha puesto un claro límite a la pretensión del absolutismo en las relaciones laborales, producto de lo cual la Constitución Política no resultaba aplicable al interior de las empresas, instituciones o servicios. Constituye un avance innegable en el respeto a la dignidad y derechos fundamentales del trabajador.



De acuerdo a la Dirección del Trabajo, Orden de Servicio N° 9, de 31 de diciembre de 2008, el conjunto de derechos y garantías objeto de tutela especial por este procedimiento, son los siguientes:

"1. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral (Artículo 19 número 1 de la Constitución Política).

"2. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (Art. 19 N° 4).

"3. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (Art. 19 número 5) "4. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (Art. 19, N° 6, inciso I).

"5. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma o por cualquier medio (Art. 19, N° 12, inciso I).

"6. La libertad de trabajo y su libre elección (Art. 19 N°16, inc. 1 y 4).

"7. Derecho a la no discriminación, por los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2o del Código del Trabajo, con excepción de su inc. 6o.

"8. Derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones administrativas o judiciales (garantía de indemnidad, artículo 485 inciso 31 del Código del Trabajo).

"9. Prácticas antisindicales o desleales en la negociación colectiva (artículo 289, 290,291, 387 y 388 del Código del Trabajo).

Con el primer sumario, claramente se lesiona el derecho fundamental de la libertad de emitir opinión (Artículo 19 N° 12, inc. I). En este sumario el Rector Alvaro Rojas Marín me aplicó una sanción equivalente a una multa del 15% de mi remuneración mensual. El que ordenó el sumario, a título de haberse supuestamente vulnerado el Estatuto de la Universidad de 1981, el mismo al que criticaba en mi carta al Director y respecto de opiniones que afectaban a la persona del Rector, es la persona que sanciona. El derecho a un justo proceso no es un bien fundamental tutelado por la acción laboral pero su transgresión ostensible es prueba más que suficiente de la arbitrariedad: el "ofendido" por mi opinión, no puede ser el instructor del sumario y el que resuelve el mismo. La imparcialidad es una exigencia ética que prevalece. Pedí reposición de esta sanción el día 27 de agosto de 2018 y se me denegó recién el 15 de noviembre de 2018. El viernes 23 de noviembre recién pasado, se ha presentado un recurso de reclamación de legalidad ante la Contraloría General de la República.



Con el segundo sumario, se lesiona mi derecho a la honra (artículo 19 N° 4), pues se busca mi descrédito personal y como académico.

Se me imputa, falsamente, abuso de poder contra una alumna, y se da a conocer a terceros (los alumnos en toma) que existe la investigación, pese a que ésta aún no se iniciaba. Ya hemos dicho que el Investigador nominado para los efectos de la investigación sumaria pidió mi sobreseimiento. Sin fundamento alguno, por orden de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se nombró un nuevo Fiscal quien formuló cargo con fecha 6 de diciembre de 2018.

Con el tercer sumario, se vulneran mi derecho al respeto a la vida privada (artículo 19 N° 4°) y a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (artículo 19 N° 5) tanto como mi derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1). No hay forma de comunicación más normal y frecuente que las conversaciones entre las personas, espacio en que se comparten pensamientos, sentimientos u otros. Quiérase o no, en el tercer sumario se premia la deslealtad, se estimula la maledicencia, se viola la confianza que debiese existir en toda comunidad de trabajo. Tener que cuidarnos del otro, solo distorsiona las relaciones humanas y aunque alguien pueda pensar que es exagerado, esto reedita el soplónaje, mecanismo que usaban las policías secretas y que permitieron siniestras persecuciones en tiempos no muy lejanos. Que una autoridad, use una carta como denuncia, que transmite una conversación privada, en la forma y contenido que el escritor quiere transmitir, para ordenar un sumario contra el "denunciado" es un acto denigrante desde luego para el denunciante pero también para el que ordena inquirir. Por escrito solicité al Fiscal Palomo que explique qué hecho disciplinario se investiga, pero en dos ocasiones se ha negado a responder bajo la excusa de estar cumpliendo requerimientos de la autoridad.

Sin perjuicio de que para conocer más íntegramente los hechos vulneratorios de mis derechos fundamentales, se pudiesen requerir esas piezas sumariales, ellas tienen sus propias vías tanto de resolución como recursivas.

La cuestión jurídica perteneciente a esta instancia jurisdiccional laboral es de otra naturaleza que aquella de orden administrativo: si del ejercicio de las facultades del empleador por cuestiones suscitadas en la relación laboral, han resultado vulnerados mis derechos fundamentales sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, aquí radica el quid jurídico de la presente causa.

En este mismo cuadro, como una manifestación más de la vulneración de mis derechos fundamentales, arbitrariamente, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Talca, cuyo Director es el abogado Ricardo Sánchez, unidad que ha participado en todos los actos persecutorios de que he sido víctima se ha negado a



resolver una injusta situación de suspensión del pago de una forma remuneracional que tienen los académicos que hacen un número determinados de horas de clase. Como se explica en el Primer Otrosí de la presente acción judicial durante el período académico del Año 2017, me fue suspendido el pago de la asignación de exclusividad, desde abril del año 2017 a febrero de 2018. En diciembre del año 2017 la resolución de este asunto ha estado en manos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad y a pesar de tener todos los antecedentes que acreditan la improcedencia de la suspensión de pago de esta asignación que me corresponde, sistemática y arbitrariamente se ha negado restituirme un derecho que todo académico tiene. En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 489 del Código del Trabajo, demando su pago conjuntamente con la acción de tutela, porque de lo contrario implicaría una renuncia a aquella que no se ejerce, lo que jurídica y moralmente me resulta inaceptable.

Si a todo lo expuesto en forma sucinta agregamos la decisión de invisibilizarme por parte de la Dirección de Comunicaciones, discriminándome, durante el año 2018, del trato que recibía como académico cuando era parte de informaciones relevantes que prestigan a la Universidad o que resultan de interés de ésta en su aporte a la comunidad local y/o regional.

Estamos frente a un cuadro de acoso laboral en que altas autoridades de la Universidad, vinculadas directa o indirectamente con un grupo acotados de académicos de la Facultad de Ciencias Forestales, en desprecio o desprecio de todo lo que personalmente entrego en bien de los estudiantes, de la Universidad, de la Facultad, de mi país y Región, de manera de que no se condicen con los títulos de conocimientos que ostentan no han reparados en medios para hostilizar, perseguir y dañar a este Profesor Titular que acciona de tutela laboral por vulneración de sus derechos fundamentales, en término que por lo sistemático e invasivo se ha tornado en un trato cruel y degradante. Todo lo denunciado ha ocurrido en el curso del año 2018 y se extiende hasta el presente.

II. Antecedentes profesionales y académicos.-

Para una mejor comprensión de los hechos que se expondrán en el cuerpo de este escrito resulta necesario informar a VS. sobre mis antecedentes profesionales y académicos.

Realicé mis estudios secundarios en el Instituto Nacional y universitario de pre grado en la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile, entre los años 1976 y 1981, recibiendo el título de Ingeniero Forestal el año 1983.



Desde esa fecha he trabajado en diversas instituciones públicas y privadas y desde el año 1989 soy académico de la Universidad de Talca, en la Escuela de Ingeniería Forestal.

En mi desempeño académico a! interior de la Universidad, he recibido las siguientes Distinciones y desempeñado los siguientes cargos:

- a) Doctorado en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, con la máxima distinción de "cum laude apto por unanimidad", el año 1996.
- b) He sido Profesor de post grado de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Lleida, todas de España, durante los años 1998 a 2000.
- c) Desde el año 2011, tengo la máxima categoría de la Universidad de Talca como Profesor Titular.
- d) He sido Profesor de diplomado de la Universidad de Chile, en los años 2017 y 2018.
- e) Como académico de la Facultad de Cs. Forestales de la U. de Talca he dirigido más de 60 tesis de grado de la carrera de Ingeniería Forestal.
- f) He sido Director de 26 proyectos de Investigación, con fondos Fondecyt, Fondef, Corfo, FIC, CNR, y otros fondos de organismos públicos y privados, con un total de fondos adjudicados que supera los 6 millones de dólares.
- g) He sido Investigador alterno y co investigador en 7 proyectos de investigación.
- h) Conferencista en diversos países de América Latina y Europa en temas de hidrología, gestión del agua y control de sedimentos.
- i) Consultor de Unesco, para la creación en Chile del Centro del Agua para las Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, 2000-2004.
- j) Representante de Chile ante la reunión bianual de los Comités Nacionales para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, en 2011, 2013, 2015 y 2018.
- k) El año 2009 fui distinguido por votación de los miembros del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, como investigador destacado del año en Hidrología.
- l) El equipo del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental (CTHA) de la Universidad de Talca, del cual soy Director, desde el año 2010, ha sido distinguido en cuatro oportunidades para elaborar el capítulo de Aguas Continentales, del "Informe País sobre el Estado del Medio Ambiente en Chile", que es el documento oficial del Gobierno de Chile para exponer el estado del medio ambiente.



m) El equipo que dirijo fue seleccionado por la prestigiosa revista Journal of Hydrology para llevar a cabo el estudio sobre la Gobernanza del Agua en Chile, el cual fue solicitado a diversos países y grupos de investigación en cada uno de ellos.

n) He obtenido los siguientes Reconocimientos: del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, (2010), República Dominicana, por La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. (2010), por la Dirección Meteorológica de Chile (2012), por el Centro del Agua para las Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (2015), de la Unesco.

o) El año 2018 se me adjudicó la Cátedra Unesco en "Hidrología de superficie: Investigación, conocimiento y difusión en escenarios de incertidumbre climática". Esta cátedra, que es la primera en Chile en estas materias y la primera cátedra Unesco que adjudica la U. de Talca, fue postulada el año 2017 a la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con la Unesco y contó con el apoyo de la Universidad de Talca y de otras instituciones nacionales, como la U. de Chile, la U. de Concepción, de la Dirección General de Aguas, de la Corporación Chilena de la Madera y del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco. A nivel internacional fue apoyada por las universidades de Arizona, Agraria La Molina de Perú, de Sao Paulo, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe de Unesco, Cazalac.

p) El año 2018 fui elegido por la Corporación Chilena de la Madera, en votación de sus miembros como Investigador Destacado del año 2017, por mis trabajos en Hidrología Forestal.

Por otra parte, cuento con la más alta producción científica de mi Facultad, contabilizando más de 35 publicaciones científicas de alto impacto, en revistas tales como Water, Journal of Hydrology, Hydrological Processes, Ingeniería Hidráulica en México, Aqua - LAC, Chilean Journal of Agriculture! Research, Hydrological Sciences journal, Journal of tropical forest Science y Water resources management, entre otras. En este ámbito, he obtenido el índice H(8), que indica las citaciones que se hace al trabajo científico de un investigador, siendo este índice el más alto de mi Facultad de Ciencias Forestales.

En base a los reconocimientos recibidos y a mi participación en actividades extracurriculares, es posible afirmar que poseo una excelente vinculación con el medio. Además hay que considerar que como experto en esta materia suelen entrevistarme en diversos medios de comunicación a fin de dar mi opinión en temas relacionados con hidrología.



De las evaluaciones semestrales de los estudiantes en el ámbito docente he tenido las notas más altas de la Facultad, por sobre el departamento (Forestal y Ambiental) y la facultad. Con objetividad se puede decir que mi labor académica es reconocida a nivel nacional e internacional como uno de los hidrólogos más prestigiosos del país, avalado por las distinciones alcanzadas.

Pido excusas por dar cuenta de estos aspectos curriculares. Me veo en la necesidad de hacerlo para contrastar la valoración de otros y de la persecución de que soy víctima en mi propia facultad y casa de estudio. Lo hago para que VS pueda evaluar lo que significa para mi persona el cumplir con mis altas responsabilidades académicas tanto en la Universidad de Talca como en otras como la Universidad de Chile y múltiples invitaciones internacionales derivadas, entre otras razones, por la distinción para Chile de tener la responsabilidad de desarrollar la Cátedra Unesco sobre Hidrología de Superficie y tener que distraer energía para enfrentar un continuo, odioso y estéril hostigamiento y persecución constitutivos de acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales.

Puedo señalar que este año 2018 poseo al menos tres publicaciones científicas en revistas reconocidas y probablemente encabezaré nuevamente la producción de mi Facultad, pese a la persecución que he sufrido este año.

III. Relación circunstanciadas de los hechos.

En la parte introductoria de la presente Acción de Tutela me he permitido describir los hechos que fundan ésta en términos generales pero rigurosos, señalando el marco jurídico que nos permite encuadrar esos hechos en la acción que se ejerce en estos autos que protege a los trabajadores frente a situaciones de abuso de poder y vulneración de derechos fundamentales por la parte empleadora.

En Chile, por hechos muy dolorosos, que son hoy de público conocimiento, ocurridos en diversas instituciones y medios hemos tomado conciencia del mal que significan los abusos de poder y de conciencia que ejercen personas como método de sujeción y subordinación a su temporal y efímera, al final de cuenta, posición de autoridad. Tales prácticas constituyen una perversión del sentido del poder, desviando su centro que es el servicio en la inútil pretensión de asegurar el control de posiciones de poder para sí y el grupo que representan o sostienen.

No puedo permanecer en silencio ni inerte frente a tanto abuso de poder de que he sido víctima sin el mínimo respeto a la dignidad de mi persona. Cada sumario se usa por quienes lo promueven como un medio para denostar, como si uno y el otro y el otro fuesen la prueba de la culpabilidad en todos. Es reproducir, a la escala de una



pequeña comunidad universitaria, el funesto método nazi de mentir y mentir, que algo queda.

El que ejerce un legítimo derecho a nadie ofende. El empleador ya no es un pequeño dictador que pudiese imponer su voluntad a quienes se encuentran en situación de 'subordinación y dependencia'⁷, según malamente se describe la relación laboral. Hoy los derechos fundamentales son un límite a sus facultades de dirección. Nada puede prevalecer por sobre los derechos que la Constitución declara o reconoce ni menos respecto de los derechos humanos que los tratados internacionales proclaman como propios de la dignidad humana. Con una obstinación inimaginable de causar daño a una persona, por cualquier causa o medio, se ha afectado mi dignidad e integridad personal, se ha afectado mi derecho de opinión que es la esencia de una institución universitaria y no sólo aquella que se emite en forma pública sino de aquella que se produce en el diálogo privado entre dos personas, entre dos docentes. A tanto llega la infamia que el último "sumario", si se le puede llamar así, trata de una carta que el profesor Francisco Zamudio, le manda al Rector acerca de lo que yo habría conversado con él, tergiversando hechos, faltando evidentemente a la verdad y violando la intimidad entre dos personas, hechos indignos para dos académicos que se conocen desde hace algo así como 30 años.

No me resulta grato efectuar esta denuncia, dado que mi carrera profesional y académica ha estado ligada por casi 30 años a la Universidad de Talca, institución a la que aprecio por su rol en el desarrollo de la Región y del país, al que estoy convencido de haber contribuido con mis mejores esfuerzos, hecho que pueden ratificar diversos colegas de diversas instituciones nacionales e internacionales, acerca de cómo he puesto en el mejor nivel académico de mi especialidad a la U. de Talca.

Al final de cuentas, las conductas de acoso y persecución en mi contra de las autoridades de la Universidad, son por hechos ajenos a la vida académica, son frutos de la represalia por mis opiniones y el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, al representar al inicio de un proceso la impropiedad de que un Rector dure 28 años en un cargo. Consecuencialmente, en la elección de Rector no apoyé al señor Alvaro Rojas sino al alternativo a esa candidatura. En mayo de 2018, tuve el atrevimiento de ser candidato a Decano de la Facultad y ello quizás originó una red para impedir tal pretensión y anular mi presencia en ésta como en la Universidad a título de ser una persona libre, independiente, no domesticable por quienes ejercen el poder, menos si lo ejercen de manera que estimo incompatible con el bien común.

Indicios de vulneración de derechos.



Los indicios de los acosos y persecución que denunció y de los que he sido víctima durante el año 2018, son los siguientes: (i) los sumarios administrativos en razón de opiniones vertidas, por una parte y otras fundadas en imputaciones falsas; (ii) acciones de invisibilización, excluyéndome de las plataformas de comunicaciones de la Universidad y (iii) negativa de la Dirección de Asuntos jurídicos de ordenar el pago de la asignación de exclusividad, por el período en que ésta no se pagó, cuyos antecedentes se exponen en el Primer Otrosí de autos:

1. - Sumario incoado en razón de opiniones críticas vertidas por mí en relación a la elección de Rector en la Universidad.

A fines de 2017, o principio de 2018, con ocasión del proceso eleccionario de Rector, adherí a la candidatura del Profesor Luis Huerta, que era alternativa a la candidatura del Rector en ejercicio a esa fecha y actual Rector Alvaro Rojas, que desempeñaba el mismo cargo desde hacía más de 24 años.

En la presente acción de tutela reproduje la carta que dirigiese al Director del Diario El Centro, publicada el 26 de Diciembre de 2017, en que expresaba mi reflexión sobre las elecciones parlamentarias a nivel nacional en relación a la no reelección o el límite a ellas. En agosto de 2017, aproximadamente, había sido entrevistado por un equipo audiovisual del diario electrónico El Desconcierto, sobre las universidades públicas con motivo de la discusión de la nueva ley sobre éstas, muchas regidas por decreto leyes de la dictadura, entre ellas la hoy Universidad de Talca. Sin embargo, por razones que desconozco, sólo en Enero de 2018 se dio a conocer ese programa, pero centrado solo en la Universidad de Talca, en el que se recogían opiniones de diversas personas, entre las cuales estaba yo mismo, acerca de la situación de la Universidad y de la reelección del Rector Rojas.

Sin embargo, el 13 de Enero de 2018, el Consejo Académico, presidido por el Rector Alvaro Rojas, (el Consejo Académico tiene solo un papel consultivo), envió un comunicado a la comunidad universitaria, indicando que un grupo pequeño de funcionarios había denostado a la Universidad, por lo que buscarían responsabilidades que se ameriten. Yo mismo respondí esta comunicación en carta dirigida a la Sra. María Fernanda Vásquez, de fecha 26 de enero de 2018, expresando lo siguiente:

Sra.

María Fernanda Vásquez Secretaria General Universidad de Talca Estimada Secretaria General:

Mediante un comunicado difundido masivamente hace unas semanas, he tomado conocimiento de la declaración hecha por el Consejo Académico de la Universidad de



Talca, en que se refiere a "algunos actos que han denostado y perjudicado a la universidad repudiando tales actos y expresando diversos planteamientos, frente a lo cual puedo señalar lo que sigue:

a) Quien suscribe fue el autor de una carta al Diario el Centro y uno de los entrevistados en un reportaje televisivo, en los cuales expresé mi disenso frente a algunas situaciones que se dan al interior de la universidad. Las situaciones aludidas estaban referidas principalmente a la permanencia del actual Rector por 28 años, lo que no me parecía ético bajo un prisma democrático y por tratarse de una universidad pública. Asimismo cuestionaba la existencia de listas que se pasaban para su firma a los académicos, de forma previa a la elección, además del excesivo poder que le otorga al Rector un estatuto heredado de un periodo excepcional de la República y sin modificaciones en 28 años de vida democrática. Finalmente, cuestionaba el que según mi parecer era un sueldo excesivo del Rector, con un valor promedio por sobre el de la Presidenta de la República, hecho que al menos a quien suscribe le parece escandaloso por tratarse de una universidad pública del Estado, que pagan todos los chilenos y chilenas.

b) Todas las respuestas aparecidas en los diarios y principalmente la declaración del Consejo Académico no asumen estos cuestionamientos ni intentan responder a los mismos, como correspondería a una universidad pública, que se supone debe ser la cuna del disenso, de la discusión democrática y del intercambio de opiniones. Si esto no ocurre en la universidad, ¿dónde podrá ocurrir se pregunta uno? Y si esto no se da, ¿qué clase de ciudadanos y ciudadanas estamos formando, como lo cuestiona una estudiante en el reportaje televisivo ya aludido? Pero, el Consejo Académico no solo no responde a estos cuestionamientos, sino que esboza una amenaza contra quienes pudieron haber incurrido en esta actitud, dado que habla de "buscar las responsabilidades Y surge una nueva pregunta. ¿Qué responsabilidades? ¿Las de dar a conocer una situación que para muchos es al menos poco ética? ¿La de plantear una opinión divergente al interior de una universidad que es pública y por ende debe dar cuenta de sus actos frente a la ciudadanía, porque esa sociedad nos impone deberes y derechos a los cuales debemos responder con los valores de la democracia, la transparencia, la ética y la verdad? Me parece que esto es más bien un deber que debe cumplir todo ciudadano y más aún, un deber que impone la democracia, lo cual cobra un mayor valor en una institución universitaria.

c) Una sociedad democrática y plural significa exactamente eso y ello implica escuchar o leer cosas que en muchos casos no nos son cómodas, porque provienen de otras visiones, especialmente cuando hablamos del mundo de la universidad. De



ahí viene la tolerancia a la diversidad, elemento clave de una universidad pública y del Estado, porque a partir de lo mismo es posible generar propuestas de actuación para nuestras sociedades. Y eso es aún más importante en una universidad que posee un gran mandante, como es la ciudadanía que la apoya y la financia para su buen funcionamiento.

d) La mera legalidad no quita la falta de ética ni de actuación deontológica, y ello es un hecho constatable en nuestra historia reciente. Hace algunos años, por ejemplo, el lucro en la educación subvencionada era legal, pero hoy a muchos nos parece ofensivo. ¿Acaso esta práctica solo nos empezó a parecer discutible o antiética luego de que se modificara la antigua normativa o fue precisamente nuestro cuestionamiento a ella lo que generó los cambios? Para ser más claro, la carta enviada al diario Ei Centro, no ha puesto en duda la transparencia de las elecciones llevadas a cabo en la UTAL, sino la ética que hay detrás de los estatutos que la rigen, y esto, no puede ser considerado una falta o un agravio bajo ningún punto de vista.

e) Deseo señalar que no es posible equiparar justicia y legalidad, pues esa línea de reflexión está fuera de todo espíritu idealista. En la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, se lee: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." Cabe preguntarse colegas cómo entendemos este derecho al interior de la Universidad de Talca, si se señala que "el disenso es absolutamente válido, pero que de ningún modo puede afectar la imagen de la casa de estudios". Esta, permítanme decir, es una limitante demasiado peligrosa, coercitiva y alienante.

Estimados colegas; creo que estas elecciones nos plantean la posibilidad cierta, democrática, justa y acorde al espíritu de la República, de internalizar estas temáticas y producir los necesarios cambios en el tiempo futuro que ya se avecina, independiente del candidato que resulte vencedor de la justa eleccionaria. Está en nuestras manos asumir estas situaciones y provocar el cambio necesario en el funcionamiento de las universidades del Estado, por la necesidad de otorgar mayor valor a la educación universitaria y pública. Este valor debe traducirse en aspectos éticos para la formación de profesionales, la realización de investigaciones y la conexión con el medio externo, en donde se debe visualizar a este tipo de universidades, como parte de una compleja trama que es capaz de dar sentido económico, social y ambiental', en tiempo y espacio, a un Estado que precisa de sus universidades públicas como un faro en escenarios de incertidumbre y de cambio



global. Termino con la siguiente frase de Martin Luther King: "La cobardía hace la pregunta; ¿Es seguro? La conveniencia hace la pregunta: ¿Es político? La vanidad hace la pregunta. ¿Es popular? Pero la conciencia hace la pregunta. ¿Es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular. Pero hay que tomarla porque es la correcta".

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

El proceso eleccionario tuvo lugar el 13 de marzo de 2018, fecha en que fue reelegido Alvaro Rojas como Rector. Debo señalar que mientras Alvaro Rojas fue candidato y estaba al mando de la institución la Rectora subrogante, Sra. Gilda Carrasco, no se incoó ningún sumario contra mí.

El 12 de Abril de 2018, el Rector Alvaro Rojas ordenó instruir sumario, en mi contra, basado en un Informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad, de fecha 26 de Marzo de 2018, dirigido por Ricardo Sánchez Venegas.

En el informe se me imputaba una eventual responsabilidad penal por mis declaraciones vertidas en el Diario El Centro y en El Desconcierto, hecho que también daría origen a responsabilidad administrativa. Se designó Fiscal al Profesor Carlos Padilla, quien se inhabilitó y en su lugar, fue designado el profesor Humberto Nogueira Alcalá, cuya situación administrativa como profesor, pendiente desde hacía algunos años, se había regularizado en el Consejo Académico de 26 de marzo de 2018. Recusé formalmente el nombramiento del profesor Nogueira como Fiscal, rechazando éste inhabilitarse.

Con fecha 4 de Junio de 2018, el Fiscal Nogueira formuló cargos en mi contra, ya insinuados en el Informe de la Unidad Jurídica de la Universidad, los que consistirían en

Incumplir mis obligaciones funcionarias al vulnerar el artículo 8° de la Ordenanza General del Académico de la Universidad de Talca, el cual determina el deber de contribuir a resguardar el prestigio institucional, mediante el planteamiento de sus quejas v críticas, primeramente, ante las unidades componentes de la Universidad v sus autoridades superiores.

Incumplimiento del artículo 27 del Estatuto de la Universidad de Talca, referido a derechos y deberes académicos, cuyo numeral 3o impone como obligaciones especiales de los académicos, la prudencia en sus declaraciones y acciones, ya que debe prever que el público puede juzgar a la Universidad por sus declaraciones v acciones, debiendo en todo caso ser exacto, veraz, mostrar respeto a las opiniones de los demás, v ser explícito para indicar que él no es vocero de la corporación a menos de que haya sido comisionado especialmente para ello.



Respondí estos cargos el 23 de Junio, explicando las razones morales y jurídicas que demostraban que no había incurrido en faltas administrativas y que se me estaba sumariando en razón de mis opiniones manifestadas en la forma que quedó explicada, fundada en el decreto ley que instituye la Universidad de Talca del año 1981. Esas normas además no resultan aplicables, menos por personas que proclaman su adhesión al Estado de Derecho Democrático porque contrarían normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. Lo más grosero e inexplicable es que traicionan el espíritu y el texto de la ley publicada el 5 de junio de 2018, la Ley NÚM. 21.094, Sobre universidades estatales, que sobre la Misión y principios de ellas se expresa: "Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, las universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos originarios y del medio ambiente" (inciso 3o del artículo 4o) y su artículo 5o que reproducimos íntegramente:

"Artículo 5. - Principios. Los principios que guían el quehacer de las universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda expresión religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de investigación y de estudio; la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la transparencia y el acceso al conocimiento-

Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por las universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, y son vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción."

Pese a ello, el Fiscal cerró el sumario, proponiendo aplicar medidas disciplinarias: concretamente, una anotación de demérito de 3 puntos y el descuento del 15% de mi remuneración mensual por una vez, aunque consideró como atenuante una "irreprochable conducta anterior"

Debo señalar que soy el primer y único académico que ha sido sumariado entre el año 1990 y la fecha, invocando los artículos citados por el Fiscal, que se refieren al Estatuto de la Universidad de Talca del año 1981. Se desprecia la norma que surge del debate democrático como la Ley N°21.094 y se privilegia para los efectos sancionatorios normas que quienes la invocan no habría dudado que ayer la habrían denunciados como inaplicables por inconstitucionales.



Con fecha 20 de agosto de 2018 fui notificado de la R. U. N° 1344 dictada por el Rector Alvaro Rojas, que me impuso la medida disciplinaria de descuento del 15% de mi remuneración mensual por una vez.

Con fecha 27 de Agosto presenté un recurso de Reposición en contra de esta Resolución, patrocinado por el abogado don Tomás Jordán. En el recurso se cuestiona, entre otras, que el Rector Rojas no se hubiera inhabilitado dada su evidente implicancia. La Reposición fue rechazada, de lo que se me notificó el 15 de noviembre de 2018 y con fecha 23 de Noviembre de 2018. Recién pasado, hice una presentación en Contraloría General de la República, solicitando se declare ese sumario con vicios de legalidad.

2. - Segundo sumario, sobre imputaciones falsas, esta vez por un supuesto abuso de poder contra una alumna.

Los hechos son los siguientes:

El día martes 5 de diciembre de 2017, una alumna (K.A.) copió dos pruebas de mi computador. En la tarde me di cuenta de la copia de las pruebas, situación que fue ratificada por los investigadores del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental (CTHA). Los hechos apuntaban a dicha alumna, que había dejado rastro informático de su sustracción. La alumna no cursaba la materia de Hidrología, sino de Preparación de Artículos Científicos. Huelga decir que era la primera vez -en 30 años- que me acontecía algo de esta naturaleza y mi impresión fue enorme porque yo le había facilitado mi computador personal para que ella pudiese trabajar en el ramo que seguía con mi persona.

Al advertir la sustracción de las pruebas, las cambié evitando un posible efecto adverso. El mismo día me reuní con ella y le señalé que su falta era grave y que eventualmente podría ameritar la sanción de expulsión. Al día siguiente comuniqué la situación al Decano para que este siguiera el procedimiento que estimara adecuado.

La alumna me pidió disculpas, por whatsapp, expresando su deseo de abandonar la carrera. Le respondí que no la condenaba y que debía hablar con el Decano.

En los días siguientes un investigador del CTHA, el Ing. Alfredo Ibáñez, me dijo que había tomado conocimiento de que en redes sociales y en pasillos se hacían comentarios lapidarios sobre la alumna, que sus compañeros la apuntaban con el dedo y le expresaban su repudio por lo que hizo, lo que la tenía en una situación muy quebrantada anímicamente. Comentamos que este hecho era preocupante por el temor de que la muchacha tomara una decisión poco racional.

En función de lo anterior, hablé con la alumna para decirle que tal vez sería conveniente que hiciera una carta de disculpas a sus compañeros, lo cual le haría



bajar la presión del medio estudiantil. Me respondió que no estaba dispuesta a esa humillación. Le dije que era un acto de valentía el ofrecer disculpas, que habla bien de quien lo hace. Que eso siempre enaltece a quien lo hace, que un acto de contrición siempre va a ser bien recibido, pero su respuesta fue negativa. Alfredo Ibáñez también conversó con ella y le recomendó escribir la carta, según él mismo me contó. El día 13 de diciembre envié un whatsapp a la alumna, indicándole que debía terminar su papel, que es parte de la asignatura que cursa conmigo.

Le dije que la "noche no dura siempre" El lunes 18 de diciembre me comunicó telefónicamente que escribiría la carta. Me hizo Negar una propuesta de carta, que le devolví con "control de cambios" para que ella decidiera si los aceptaba y hablé con algunos de sus compañeros, con el fin que la acogieran y valoraran su gesto.

El día 08 de junio, por las estudiantes en Toma, me informé de que existiría un procedimiento disciplinario en mi contra por supuesto abuso de poder, sin saber por qué y respecto de quién. Su existencia quedó en el Acta del Consejo Académico Extraordinario del día 07 de junio de 2018.

Se encargó la investigación sumaria al Profesor Carlos Padilla, quien recibió mi declaración sobre este hecho el 20 de Julio pasado. El profesor Padilla, como Investigador, estimó que no había mérito para continuar con la investigación sumaria, por lo cual propuso mi sobreseimiento.

Sin embargo, con fecha 27 de Septiembre de 2018, el profesor Raúl Carnevalí me remitió e-mail citándome a declarar en un sumario administrativo, en que él había sido designado Fiscal, en relación a estos mismos hechos. Le pedí por correo electrónico que me diera a conocer la resolución que había ordenado el sumario, sin que me haya proveído de esta información. El 2 de Octubre le pedí formalmente copia del resultado de la investigación sumaria que llevó adelante el Profesor Padilla, la que se me negó. Insistí en la petición y el profesor Carnevali, el 8 de Octubre, nuevamente se negó a darme copia, pero me informó que efectivamente en la investigación sumaria se había propuesto mi sobreseimiento, aunque la Rectoría había decidido pasarlo a sumario, hecho que el abogado don Tomás Jordán me ha señalado que lo que debió haberse realizado fue una reapertura de la investigación sumaria y no elevar ésta, con petición de sobreseimiento, a un sumario, hecho que habla por sí solo de la persecución en mi contra.

Me citó a declarar el 10 de Octubre pasado y concurrí a la cita, pero el Fiscal no estaba en su oficina. Finalmente, el día 16 de octubre, declaré ante el profesor Carnevali sobre la sustracción de la prueba y lo sucedido con la alumna.



Yo mismo no he tenido ningún contacto con la alumna desde Febrero de 2018, salvo una conversación telefónica producto de su llamado en junio de 2018, en donde me señalaba que solo tenía agradecimiento hacia mí, que lo único que quería era terminar su carrera y que no era ella quien me había denunciado.

3. - Tercer sumario, sobre imputación falsa, en relación a una denuncia del profesor Francisco Zamudio sobre un supuesto "encontronazo" con él en su oficina.- Este hecho sólo lo conocí, de manera indirecta, encontrándome en la ciudad de Panamá en una reunión referida al Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, en que debía presentar los avances de la nueva cátedra Unesco en Hidrología de Superficie y el Programa de Hidrología de Sistemas Forestales, que coordinó a nivel de América Latina y el Caribe (22 a 26 octubre de 2018).

Conversando con el colega Ricardo Baettig, éste me contó que se había incoado un tercer sumario en mi contra, en relación a una denuncia en mi contra del profesor Francisco Zamudio, quien habría enviado una carta denunciando un "encontronazo con él en su oficina", el que habría ocurrido a fines de Agosto pasado.

No recuerdo haber tenido en nuestra larga relación profesional, alguna discusión con el profesor Zamudio, con quien a fines de Agosto me reuní en su oficina para tratar algunos temas comunes. En esa oportunidad sólo le hablé del sumario respecto a la sustracción de las pruebas, preguntándole por qué había dicho a los alumnos que yo estaba sumariado por este hecho, mucho antes que yo lo supiera. Él había dicho algún tiempo antes a los alumnos que "no era ético que un profesor fuera candidato a Decano, si tenía dos sumarios" En esa conversación me pidió disculpas por repetir algo sobre lo cual estaba equivocado, frente a lo cual insistí en que el Investigador me había sobreseído. Pero, el fondo de mi cuestionamiento era que cuando él dijo esa frase, no era público ni se me había notificado que existiera un segundo sumario. Entonces ¿cómo sabía el profesor Zamudio de su existencia si él no era ni es autoridad administrativa de la universidad? ¿Por qué le hablaba a los alumnos de un segundo sumario y que eso me inhabilitaba para ser decano? ¿Era parte de una conspiración mayor en mi contra? La elección de decano fue el 29 de mayo pasado y recién el día 7 de junio de 2018 supe de la existencia del hecho y que se trataba de un sumario, según palabras de la Secretaria General de la Universidad (a esa fecha) y frente a los estudiantes en toma, aunque correspondía a una investigación sumaria, y solo vine a declarar por esa investigación el día 20 de julio. Es decir, a no ser que el profesor Zamudio fuese parte de la trama de la investigación sumaria, era imposible que supiese de la misma con tanta antelación.



Este tercer sumario, según supe más tarde, se habría iniciado con fecha 9 de septiembre, designándose Fiscal al profesor Iván Palomo, quien sólo me informó de su existencia el 24 de Octubre pasado, al citarme a declarar. El 30 de Octubre concurrí a su oficina a prestar declaración, conociendo recién el tenor de la carta denuncia del profesor Zamudio. Lamento decir, que la denuncia carece de toda entidad y se limita a manifestar opiniones sobre mi persona, imputándome dichos y opiniones que nunca expresé, ni en público ni en privado. Sólo puedo atribuir esta denuncia y sumario a la voluntad persecutoria en mi contra mantenida desde Marzo de este año por las autoridades de la Universidad.

4. - Invisibilización en las plataformas comunicacionales de la Universidad como forma de exclusión, hasta el extremo de poner cortapisas a relevante logro académico por adjudicación de la Cátedra Unesco en Hidrología.

La Cátedra Unesco fue postulada por la U. de Talca, el año 2017 a la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con la Unesco y contó con el apoyo de otras instituciones nacionales, como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Dirección General de Aguas, la Corporación Chilena de la Madera y el Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco. A nivel internacional fue apoyada por las universidades de Arizona, Agraria La Molina de Perú, de Sao Paulo, la

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y El Caribe de Unesco, Cazalac.

En el mes de marzo de 2018 se realizó la consulta a la Dra. Mónica Salinero de la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con Unesco sobre el estado de adjudicación.

El día 5 de abril llegó un correo de Unesco dirigido a Elizabeth Rubio de Unesco y al Rector Alvaro Rojas, con copia a mí, entre otros, en donde se informaba de la adjudicación de la Cátedra y además se indica que el Rector debía aprobar el artículo 2 del Convenio adjunto a ese correo. (Esto porque Naciones Unidas solo permite cambios en ese artículo; lo demás es un articulado fijo en este tipo de Convenios). Para ello tenía plazo la universidad hasta el día 7 de mayo del año en curso. Paralelo a ello, le envié correo al Sr. Rector el mismo día comentándole lo; mismo y pidiendo que por favor revise el artículo 2 del Convenio y envíe su aprobación antes de la fecha señalada

El día sábado 5 de mayo del año en curso, le envié correo al Sr. Gonzalo Herrera, Vicerrector de Transferencia Tecnológica a la fecha, quien apoyó la postulación en el año 2017, indicándole que el día lunes 7 de mayo de 2018 vencía el plazo para que el



Sr. Rector enviase una respuesta a Unesco por el artículo 2 del Convenio de la cátedra Unesco El jueves 10 de mayo el Sr. Herrera responde que ya le; ha mencionado al Rector el tema, pero que no le queda claro qué es lo que debe responder el Rector. En ese momento le comento que ya estamos: fuera de plazo.

El mismo día, la secretaria del Sr. Herrera nos informa que el convenio que venía desde Unesco, Rectoría lo está devolviendo porque viene escrito en inglés y que para firma del Rector debe venir en español. De hecho me enteré que dado que se habían recibido felicitaciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), el Rector le solicitó al Ministerio la traducción, hecho que no sé si concretó. Desde MINREL me señalaron que ellos no tenían la obligación de hacer este tipo de trabajos. A mí me sorprendió, porque la Universidad de Talca posee una Dirección de Relaciones Internacionales, que por ejemplo había hecho un convenio con la U. de Arizona en inglés (MoU, Memorandum of Understanding) y muchísimos otros.

En paralelo a todo esto, me contacté con el Dr. Miguel Doria, Hidrólogo Regional de Unesco con sede en Uruguay, planteando las dudas que teníamos y sin decir que Rectoría no había respondido en los plazos requeridos por Unesco, le planteé si era posible solicitar un mayor tiempo, solicitando una extensión de plazo para la firma del convenio. Así y por la intercesión de un oficial de Unesco en París, se fijó un nuevo plazo para la firma del Rector, el que vencía el día 15 de junio y se traduciría en el convenio para que firmen Unesco y la U. de Talca. Esto fue informado al Sr. Herrera por correo electrónico el día 16 de mayo de 2018 También se volvió a informar al Sr. Herrera que lo único que se podía modificar del convenio era el artículo 2, el que fue traducido al español para que el Sr. Rector lo aprobara

El día 18 de mayo, el Sr Herrera informa que mandó todos los antecedentes a Rectoría para tramitación, y que la Vicerrectora Académica estaba de acuerdo con apoyar dicha firma. El día 22 de mayo el Decano de la Facultad de Ing. Forestal pide tramitar una copia del convenio en español para firma del Rector. El mismo día se respondió al decano señalando que se dio respuesta a la Vicerrectora. El día 23 de mayo la Vicerrectora dio respuesta a Unesco por lo solicitado. Unesco respondió señalando que agradecían el envío y que iniciarían los trámites para concretar la cátedra Unesco. El día 13 de julio, la Directora General de la Unesco firma los documentos de la cátedra Unesco y los reenvía al Rector para que este los firme.

Recién el día 20 de septiembre se mandó correo al Mineduc con copia a Unesco informando que el convenio se había enviado a Unesco París.

Si bien finalmente el equipo que dirijo en la Facultad de Ingeniería Forestal obtuvo la adjudicación de la Cátedra Unesco, gracias a la intervención y apoyo de Unesco



Uruguay frente a Unesco París, que logré personalmente obtener, las cortapisas y tramitaciones injustificadas y arbitrarias de parte de las autoridades de la Universidad, a un logro académico que enorgullece a ésta, por la adjudicación de una cátedra que es única en Chile, da cuenta de un nuevo indicio de animadversión y acoso laboral hacia mi persona. Esto, porque no firmar a tiempo la petición de Unesco puso en riesgo un logro académico de alta relevancia, en lo personal y nuestro equipo de trabajo lo que solo logró ser salvado por la intercesión de un oficial Unesco en Uruguay y de otro en París, especialmente el primero, que valoró el prestigio de nuestro trabajo e hizo gestiones extraordinarias para obtener un nuevo plazo.

Pero surge otra dimensión a este hecho VS. La obtención de la cátedra Unesco es normalmente un motivo de orgullo para las universidades del mundo, cátedras que se configuran en diversas disciplinas. De hecho es sabido que la U. de Talca está apoyando la concreción de una cátedra Unesco en la U. de Chile, a cargo del profesor Víctor Pérez, ex Rector de la U. de Chile. ¿Puede entonces entender VS que no se haya recibido ninguna nota siguiera por parte de la Rectoría o alguna autoridad universitaria que destaque este logro por y para la Universidad? Y eso solo se entiende en el marco de invisibilizar los logros del equipo que dirijo y de la persecución a que he sido sometido.

Este hecho debe unirse a la discriminación periódica en las publicaciones internas de la Universidad que he debido reclamar ante la anterior directora de Comunicaciones Sra. Liliana Guzmán, ya que las actividades que desarrolla mi equipo no son debidamente cubiertas, pueden ser ignoradas o bien no se les da la importancia que se hace con otras unidades. Los reclamos los he hecho vía correo electrónico, carta y verbalmente. Solo a modo de ejemplo, este año fui distinguido por la Corporación Chilena de la Madera como el Investigador Destacado del año 2017, por mis aportes en Hidrología Forestal, premio que fue entregado en una ceremonia en la ciudad de Concepción. Pues bien, a pesar de que se informó a Comunicaciones de la universidad, la noticia no fue cubierta y tampoco se le dio salida en los informativos de la universidad, salvo dar a conocer un link relacionado con la publicación de la noticia en medios externos. Inclusive en una oportunidad el Contralor interno, Sr. Johann Allesch, hace unos años, me sugirió ir a Contraloría General de la República.

5. - El no pago de la asignación de exclusividad, cuyo antecedentes se exponen en el Primer Otrosí, cuya decisión se encuentra en manos del Director de Asuntos jurídicos de la Universidad, sr. Ricardo Sánchez Venegas, claramente desde el año 2018, quien a pesar de tener todos los antecedentes para efecto de reponer el pago



de esta asignación respecto del período abril 2017 y febrero de 2018, se ha negado a hacerlo.

Los hechos descritos en el cuerpo de esta denuncia, ponen de manifiesto que ha habido grave afectación de mis derechos fundamentales como trabajador. Los derechos fundamentales que me han sido vulnerados son los que quedaron dichos más arriba: conductas de acoso laboral, y vulneración de mi derecho a una vida digna y con ello mi integridad síquica, que asegura el artículo 19 N° 1 de la Constitución; derecho al respeto y protección de la honra de la persona que garantiza el N° 4 de la misma disposición; derecho a la libertad de conciencia y pensamiento que garantiza el N° 6 del artículo 19 citado; y derecho al respeto de la libertad de emitir opinión que asegura el N° 12 de las garantías constitucionales.

Asimismo, respecto del artículo 2o del Código de Trabajo por actos de discriminación por razones de "opinión política" relativa a temas universitarios y académicos alterando el trato en el empleo.

La discriminación se ha traducido en actos concretos, entre otros, la invisibilización y las cortapisas a la adjudicada Cátedra de Unesco en Hidrología, una actividad académica relevante para la Universidad, no informándose por la Dirección de Comunicación de ella, todo ello con un claro propósito de menguar la relevancia académica de mi trabajo y la importancia de éste para el desarrollo del país. También omitieron toda información sobre el hecho de haber sido elegido por la Corporación Chilena de la Madera como Investigador Destacado del año 2017 por mi trabajo en Hidrología Forestal. O el hecho de que soy normalmente citado a las Comisiones de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados y del Senado, aunque la difusión de estas noticias no sea hecha.

Pero sí se dio a conocer a los estudiantes, en medio de la toma de junio de 2018, cuando los estudiantes ponían en su petitorio el bajar el sumario por libertad de expresión contra este profesor, que eso no era posible, pues este mismo profesor tenía un sumario -que en verdad resultó ser una investigación sumaria- por abuso de poder contra una alumna, (al que ya he hecho referencia), pese a que nunca incurrí en tal conducta.

Más aún porque la "investigación" no fue promovida por la alumna, sino por la interpretación que hizo la autoridad universitaria de expresiones, en un proceso en que se debía proteger a un académico que fue objeto de un acto deshonesto como es la sustracción de una prueba desde su propio computador, y no favorecer a una estudiante que fue perdonada y corregida fraternalmente por ese mismo profesor. Pero, al dar a conocer esto a los estudiantes, se crea un manto de duda sobre las



acciones y el comportamiento académico de un profesor intachable en casi 30 años de carrera académica, con un destacado reconocimiento nacional e internacional, afectando gratuitamente su honra y su ética, en un acto deleznable y que expresa con claridad el acoso al que ha sido sometido.

Dentro de este contexto persecutorio, traspasando todo el límite de lo ético y razonable, una conversación privada con el Profesor Francisco Zamudio es transformada por éste en una carta acusatoria ante el Rector y ello origina un nuevo sumario.

El no pago de la asignación de exclusividad que legítimamente me corresponde es otro acto de hostigamiento.

IV. Consideraciones de derecho

1.- La acción de tutela laboral. La ley autoriza el ejercicio de la acción de tutela laboral cuando se violan algunos de los derechos fundamentales enunciados por el artículo 485 del Código del Trabajo y/o cuando se incurren en algunos de los actos de discriminación que la ley laboral prohíbe:

"El procedimiento contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números I, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. 4o, 5o, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6o, inciso primero, 12°, inciso primero, y 16°, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.

También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto.

Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada. o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales."



2. Los derechos fundamentales como limite a las atribuciones del empleador. Tal como el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es un límite a la soberanía, el respeto de los derechos fundamentales del trabajador es un límite a las facultades de dirección y administración del empleador.

El procedimiento de tutela laboral tiene lugar cuando se produce una colisión entre los derechos del trabajador que la Constitución y la ley protegen o amparan y el ejercicio de las facultades que la ley, por otra parte, reconoce al empleador, en su rol de organizador de la producción o prestación de servicios. Este choque o colisión de derechos y facultades entre unos y otros queda regulado por el legislador laboral en términos que el empleador queda limitado del pleno ejercicio de sus atribuciones si aquellas se emplean sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto al contenido esencial de los derechos de los trabajadores.

Todos los hechos descritos precedentemente en este escrito de denuncia, manifiestan que ha habido afectación de mis derechos fundamentales como trabajador.

En efecto, con los actos que he descrito, mi empleador incurrió en conductas que no pueden sino ser calificadas como de acoso laboral, me discriminó en razones de mis opiniones y vulneró, al menos, cuatro otros derechos humanos fundamentales, expresamente protegidos por la acción de tutela, a saber,

- el derecho a una vida digna y con ello mi integridad psíquica, que asegura el artículo 19 N° 1 de la Constitución,
- el respeto y protección de la honra de la persona que garantiza el N° 4 de la misma disposición;
- el derecho a la libertad de conciencia y pensamiento que garantiza el N° 6 del artículo 19 citado; y
- el respecto de la libertad de emitir opinión que asegura el N° 12 de las garantías constitucionales.

1. Del caso laboral.

El artículo 2 inciso 2o del Código del Trabajo señala, en su parte pertinente, lo siguiente: "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. [...]"

Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados. ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su



menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo."

Vinculado con lo anterior, el artículo 5º inciso lo del Código del Trabajo señala:

"El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos."

¿En qué consiste el acoso laboral o mobbing? La Dirección del Trabajo afirma que

"Es una conducta abusiva consciente y premeditada, realizada de forma sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad o la integridad psicológica o física de un trabajador o trabajadora. También se denomina acoso psicológico o psicoterror laboral." En consecuencia, el acoso laboral es per se una vulneración de derechos. La misma Dirección del Trabajo agrega que "Psicólogos expertos que han estudiado el acoso señalan que una de las formas más comunes de mobbing es el aislamiento de la víctima del resto de su entorno laboral. Este aislamiento generalmente se traduce en la asignación de tareas inútiles de modo que el empleado-víctima es desperdiciado en su potencial profesional tratado hostilmente en forma sistemática y hostigado frecuentemente hasta que se consigue aislarlo o apartarlo del trabajo."

Por su parte, la jurisprudencia judicial ha afirmado que la

"doctrina ha sido uniforme en señalar que el acoso laboral u hostigamiento es un proceso continuo de hechos reiterados por parte del empleador y que permanece en el tiempo debido, precisamente, a la tolerancia del trabajador, quien, muchas veces, no ejerce sus derechos de forma inmediata por el temor a perder su fuente de trabajo o, simplemente, porque espera que las cosas se resuelvan de otra forma. "3

Por otro lado, en el ámbito del acoso laboral, la Corte Suprema ha sostenido que

"se determinó que esta parte [demandada]-a través de su agente o representante en el local en que la actora se desempeñaba- llevó a cabo, durante la vigencia de la relación laboral conductas de acoso en su contra, afectando su integridad física y síquica, conducta que sin duda infringe el contenido ético del contrato de trabajo en cuya virtud las partes deben actuar de buena fe, lo que se traduce -para la parte empleadora- entre otras obligaciones, en respetar la dignidad de sus empleados. Por otra parte, la conducta de acoso debe ser calificada de grave desde que afectó la salud física y síquica de la demandante, por lo que aquélla deberá ser condenada a pagar las indemnizaciones legales correspondientes como se dirá. "

En el contexto de un ambiente laboral lesivo, con medidas abusivas, que generan aflicción y angustia en los trabajadores, la Corte de Apelaciones de Valdivia ha señalado que



"La Constitución de la República asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y, en resguardo de esa garantía, es necesario tomar medidas para poner término a dicho ambiente laboral. "5

Como se expuso, las conductas de acoso laboral de que he sido víctima, constituyen per se una vulneración de derechos fundamentales, ya que se me ha perseguido y buscado amedrentar, sancionar y/o doblegar, poniendo cortapisas a mi quehacer académico, desconociendo mi derecho a una existencia digna dentro del ámbito laboral, mi derecho a la integridad psíquica y mi derecho a la honra frente a mis pares y a los ' Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago: R.I.T. T-306-2010. Sentencia de 14 de enero 2011. Considerando 3o.

4 Corte Suprema: Rol N° 2,202-12. Sentencia de 18 de enero de 2013.

5 Corte de Apelaciones de Valdivia: Rol N°665-2006. Sentencia de 6 de septiembre de 2006. Estudiantes, todo en razón de mis opiniones, como una advertencia para mí (y eventualmente para otros), de que no se tolerarán opiniones disidentes al Interior de la Universidad.

Los abusos de poder de los que he sido víctima, el ninguneo, el atribuirme faltas al Reglamento de la Universidad por haber manifestado una opinión no obsecuente o sumisa con quien detentaba el poder, el atribuirme abuso de poder por haber representado a una alumna que había incurrido en una falta grave, dándole una oportunidad de enmendar su conducta, constituyen agresiones psicológicas u hostigamientos reiterados, ejercidos por el empleador.

El entorpecer el trabajo académico que debía desarrollar el Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental del que soy responsable, labor que se encontraba comprometida con una institución como la Unesco-Paris, en su división de Educación Superior, mediante el retardo por parte de las autoridades de la Universidad en el cumplimiento de los plazos comprometidos, como se explicó más arriba, no sólo desconoce el valor de mi trabajo sino que se constituye en una forma sutil pero clara de discriminación, que contrasta con el apoyo que habitualmente la Universidad presta a sus académicos. Es además un mensaje de que la Universidad no valoriza mi trabajo y una forma de amedrentamiento por mis opiniones.

A esto se suma el hecho de que reiteradamente no se publiciten noticias relativas a mi trabajo, en los medios de comunicación de la Universidad, léase Semanario y noticias electrónicas, pese a haber sido éstas ya publicadas en diversos periódicos y medios de comunicación nacionales y regionales, principalmente entrevistas y comentarios ligados a mi desempeño académico y a actividades del Centró que dirijo en temáticas



técnicas, todo lo cual da cuenta de la situación de menoscabo y discriminación que sufro.

En el mismo contexto, debe entenderse la negativa a pagarme la asignación de exclusividad que es pagada mensualmente a los profesores, con más de seis horas de docencia semanal, asignación que se me ha negado sistemáticamente por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para el periodo abril 2017-febrero 2018, pese a tener derecho a ella.

Una circunstancia agravante de la vulneración de derechos que denuncio es que este tipo de actos de abuso y acoso en el ámbito del trabajo se producen al interior de una organización que debe tener como principio de acción la protección y el estímulo de la dignidad de las personas como es una Universidad. Se trata de una organización que declara expresamente regirse por normas éticas y códigos de conducta que respetan irrestrictamente los derechos humanos de las personas. La sociedad se enriquece en humanidad cuando amparamos efectivamente la fundamentalidad de los derechos que nacen de la naturaleza humana. La forma en que fui tratado no sólo vulnera las normas antes mencionadas, sino además, normas universalmente aceptadas y aplicadas tanto a nivel interno como internacional, que la Universidad y sus autoridades no pueden desconocer.

Comparto la opinión del Profesor de Derecho Constitucional, Dr. Humberto Nogueira que ha escrito que "Hay una sola fuente de la fundamentalidad de los derechos, su relación con la dignidad humana, ya que son expresión inmediata y positiva de la misma, constituyendo el núcleo básico irreductible e irrenunciable del estatus jurídico de la persona" , donde todos ellos tienen una relación de interdependencia, "donde todos deben ser preservados armónicamente, sin perjuicio de la necesaria delimitación y configuración" . El origen de mi persecución son mis opiniones. Como bien dice el Papa Francisco "Urae. por tanto, generar espacios donde la cultura del abuso v del encubrimiento no sea el esquema dominante, donde no se confunda una actitud crítica v cuestionadora con traición8Cuando digo "no a la reelección permanente", estoy pensando en el bien de la Universidad y no en un bien propio ni en dañar a otro.

2. Del derecho a no ser discriminado en razón de opinión.

No sólo la norma del artículo 2 del Código del Trabajo prohíbe la discriminación, en sus incisos 3 y 4, señalando:

"Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación.



Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación

La Constitución establece en el artículo 19 N°2 una norma con un principio general de igualdad y, consecuentemente, de prohibición de la discriminación. En el ámbito específico de la protección del trabajo, la Constitución Política del Estado asegura a todas las personas, como establece el inciso tercero del N°16 del artículo 19, el derecho a no ser discriminado, estableciendo una prohibición de discriminar, cuando dice: "Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad

El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación son principios de carácter universal, que se encuentran presentes en todos los ordenamientos constitucionales democráticos del mundo. Rige, por tanto, a nivel nacional como internacional. El derecho internacional de los derechos humanos se ha encargado de regularlo y se erige en norma de comportamiento vinculante para todos, organizaciones, Estado y privados. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 señala en su artículo 2 lo siguiente:

"Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social", posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía."

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 señala en su artículo 2 (1) lo siguiente:

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social



Además, en este contexto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra el derecho a un recurso efectivo (art. 2.3.a) y el derecho a que la autoridad judicial competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso (art. 2.3.b).

También debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

"los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

Todas estas normas, además de ser vinculantes para el Estado porque las ha ratificado, son universalmente aceptadas como obligatorias tanto en el ámbito interno como internacional.

Estas normas, han sido desarrolladas, complementadas y reglamentadas por el artículo 2o del Código del Trabajo que dispone:

"Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación."

El legislador procesal laboral, en el artículo 485 remitió a este artículo 2o la protección que significa el procedimiento especial de tutela laboral, remisión que no excluye de la tutela la infracción a la norma constitucional.

En mi caso, se me discriminó por mis opiniones, las que se plasmaron en una "Carta al Director", publicada en el Diario El Centro, y como una entrevista en un medio digital de información y discusión política, (El Desconcierto), opiniones que decían relación directa con cuestiones que se debaten y debatían al interior de la Universidad con ocasión de la elección de Rector, y que expresé en mi calidad de persona y académico interesado en el ejercicio de la democracia al interior de la comunidad universitaria. Es importante destacar que posterior a la aparición del reportaje en El Desconcierto, la Universidad de Talca bloqueó el acceso a este medio, para quienes utilizan la red de la Universidad, situación que se mantuvo al menos hasta el mes de octubre de 2018, en una clara muestra de coerción de la libertad de prensa en una universidad pública.



Me remito a los hechos que he narrado en que se describe la discriminación y los efectos de ésta en mi vida académica.

3.- Derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar.

Este derecho, es fundamental en el quehacer universitario y especialmente en la vida académica. Sin el respeto a su contenido esencial no existe Universidad. Por otra parte, como se ha definido "La libertad de opinión al constituir expresión de valores, creencias y emisión de juicios subjetivos, sin pretensión de afirmar datos objetivos o establecer hechos, dispone de un campo de acción mucho más amplio que la libertad de información, ya que en este ámbito no opera la veracidad como límite o frontera del derecho, como tampoco constituye un límite que las opiniones sean de interés o relevancia pública, la cual tiene importancia sólo para resolver algunas tensiones frente a otros derechos."9

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el contenido esencial de este derecho en sentencia de 2 de julio de 2004 recaída en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica en los siguientes términos:

"1) El contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión

108. La Corte ha señalado anteriormente/ con respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

109. Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión "no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios".

En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

110. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para



el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

111. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención.

2) Sobre la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática

112. La Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que [...] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

113. En iguales términos a los indicados por la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos se ha manifestado sobre la importancia que reviste en la sociedad democrática la libertad de expresión, al señalar que [...] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. [...] Esto significa que [...] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue.

114. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se han pronunciado en ese mismo sentido.



115. En este sentido valga resaltar que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas aprobaron el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, en la cual, Ínter allá, señalaron que [son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

116. Existe entonces una coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.

No cabe duda que las conductas que se han descrito son atentatorias a mi derecho a la libertad de expresión. No puede entenderse que una Universidad que dice promover las libertades democráticas incurra en una vulneración abierta de este derecho.

4) Derecho a la honra

El artículo I de la Constitución establece que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.". En concordancia con el precepto anterior y en total coherencia y armonía, en el plano laboral, el artículo 2o del Código del Trabajo indica que "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona." Por su parte, el artículo 19 N°4 de la Constitución asegura a todas las personas "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia".

Cabe hacer presente justamente la vinculación entre dignidad de la persona y respeto de la honra, reconocida en el artículo 11 N° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual expresa: "Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad."

Refiriéndose a la conceptualización del derecho a la honra, el Tribunal Constitucional ha señalado:

"Que en tal orden de ideas cabe recordar, primeramente, por ser base del sistema institucional imperante en Chile, el artículo I inciso primero de la Constitución, el cual dispone que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos." Pues bien, la dignidad a la cual se alude en aquel principio capital de nuestro Código Supremo es



la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean resguardados;»

Además, los jueces constitucionales han completado el contenido de este derecho de la siguiente manera:

"Se trata, en definitiva, de un bien espiritual que, no obstante tener en ocasiones también un valor económico, el sentido común señala que lo es todo para el que lo pierde y nada para el que se lo quita. Como poéticamente lo recoge la literatura universal cuando, en el Acto III de "Otelo, el Moro de Venecia", Shakespeare pone en boca del pérfido Yago las siguientes palabras, dirigidas a su general, víctima de sus intrigas:

"Mi querido señor, en el hombre y en la mujer, el buen nombre es la joya más inmediata a sus almas. Quien me roba la bolsa, me roba una porquería, una insignificancia, nada; fue mía, es de él y había sido esclava de otros mil; pero el que me hurta mi buen nombre, me arrebató una cosa que no le enriquece y me deja pobre en verdad." (Aguilar, 13a Edición, 1965, p. 1.491)».

Asimismo, a propósito de este derecho a la honra, el Tribunal Constitucional ha señalado que "se trata de un derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo I de la Constitución, que se vincula, también, con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el N° 1° de su artículo 19, pues las consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien pueden significar, en ocasiones, una pérdida o menoscabo de carácter patrimonial más o menos concreto (si se pone en duda o desconoce la honradez de un comerciante o de un banquero, por ejemplo), la generalidad de las veces acarrea más que nada una mortificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral carente de significación económica mensurable objetivamente, que, en concepto del que lo padece, no podría ser reemplazada o compensada con una suma de dinero, tratándose, en definitiva, de un bien espiritual, no obstante tener en ocasiones también un valor económico."

El Ministro Gonzalo García completa el concepto de este derecho de la manera siguiente:

"La objetividad conlleva la necesidad de una apreciación en concreto de la potencial vulneración del derecho a la honra, pues será de acuerdo a las particulares características y posición social de las personas que el contenido de la honra varará o tendrá distintas intensidades.



En el contexto del derecho a la honra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: "Por último, el artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona." "El Tribunal ha declarado violado ese derecho en casos en los cuales se probó que el Estado había sometido a personas o grupos de personas al odio, estigmatización, desprecio público, persecución o discriminación por medio de declaraciones públicas por parte de funcionarios públicos."

Con las conductas que se han descrito en la parte de los hechos, las autoridades de la Universidad me han sometido a la estigmatización, el acoso y la denigración en mi honra personal y como académico.

Más aún, cuando la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solicitó al Rector oficialmente que le informe cuáles son las causas por las cuales se me estaba sumariando, éste responde que es en base a la legislación vigente y pregunta si se trata de libertad de expresión o del sumario (sic) por abuso de poder contra una alumna. Este absurdo e insólito sumario, a esa fecha no se había formalizado, pero seguramente sí ya lo habían decidido. El Rector Rojas informó:

"Junto con saludar, en relación a informe del antecedente, en que solicita al Suscrito informar a la Comisión de Educación sobre las razones que motivaron la instrucción de un sumario administrativo en contra del Profesor de nuestra Corporación don Roberto Pizarro Tapia, para el caso en que dicho informe se refiera a los dichos vertidos por el académico citado, que se estima afectarían el prestigio institucional, no obstante que nuestra Universidad no se encuentra comprendida en el artículo 52 N° 1 de la Constitución Política de la República -por no ser un órgano de Gobierno- igualmente hemos accedido a proporcionar a usted la información contenida en el presente oficio. Si -por su parte- lo requerido versare respecto de sumario instruido a raíz de denuncia de una estudiante por hechos que constituirían abuso de poder, mucho agradeceré indicárnoslo".

La distorsión de la verdad es un indicio claro de mala fe. El Rector intencionadamente hiere mi honra, pero sabiendo a ciencia cierta que está faltado a la verdad, porque no existe un "sumario instruido a raíz de denuncia de una estudiante por hechos que constituirían abuso de poder". Se justifica por el acto propio -instruir sumario por opinión u opiniones vertidas- enlodando al perseguido, como si hubiese habido una denuncia de una estudiante en mi contra por abuso de poder, concepto que en ese



contexto puede comprender cualquier cosa. El Rector intencionadamente siembra un manto de duda sobre mi honorabilidad frente a los H. Diputados. Aún en la contradicción hay que ser leal, diciendo siempre la verdad.

Por otra parte y cuando los estudiantes en la Toma Feminista del año 2018, exigían bajar el sumario al profesor Pizarro ya que atentaba contra la libertad de expresión, se consigna en Acta 66 de la Sesión Extraordinaria, del Consejo Académico de la Universidad de Talca del día 7 de junio de 2018, con contó con la presencia de las dirigentes estudiantiles en Toma, lo siguiente:

"Adicionalmente, tal como ha señalado la Secretaria General en la respuesta al petitorio, existe otra investigación respecto del mismo académico, (profesor Roberto Pizarro), relativa a la denuncia de una estudiante sobre una situación de abuso de poder que debe ser investigada".

Pero, la denuncia no fue realizada por la estudiante como lo señaló ella misma en conversación telefónica conmigo, de lo cual hay testigos, (hecho también señalado por el Fiscal Carlos Padilla), sino por un Tribunal de Disciplina estudiantil de la Universidad. Lo grave es que las autoridades de la Universidad desinformaron mal intencionadamente a las estudiantes en Toma como a los Diputados, abusando claramente de la posición de poder y afectando mi honra personal y de académico. Este segundo "sumario", técnicamente era una investigación sumaria que condujo como Fiscal el Profesor Carlos Padilla, quien pidió un sobreseimiento y las autoridades de la Universidad, a través del Director de Asuntos Jurídicos, ordenaron instruir sumario nombrando un nuevo Fiscal.

5) Derecho a una vida digna y afectación consecuente de la integridad física y psíquica

El artículo 19 N° 1 de la Constitución asegura a todas las personas "el derecho a la vida".

A propósito de la extensión del derecho a la vida, ésta ya no se entiende solamente en términos biológicos de vida o muerte, sino también, su ámbito de protección comprende la posibilidad de llevar una vida digna, de desempeñarse y desarrollarse en el contexto de una vida digna y de disfrutar de ella.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, de 1999, sostuvo:

"El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.



En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes actúen contra él. "

Por su parte, tal como ha sostenido el Juez Ventura Robles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Los trabajadores tienen derecho a desempeñar una actividad laboral en condiciones dignas y justas, y recibir como contraprestación de su trabajo una remuneración que permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno. Asimismo, el trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad para que el trabajador desarrolle sus aptitudes, habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano."

Vinculado con todo lo anterior, el artículo 2o del Código del Trabajo indica que "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona."

Los actos de hostigamiento reiterados ejercidos por el empleador, que se han detallado en los considerandos de hecho, vulneran mi derecho a la vida, en la vertiente del derecho a una vida digna. En efecto, la conducta continuada y reiterada del empleador ha tenido en mi persona, como consecuencia, el menoscabo, el maltrato y la humillación.

El artículo 1o de la Constitución establece que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". En concordancia con el precepto anterior el artículo 19 N°1 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho "a la integridad física y psíquica de la persona".

Los incisos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". Al interpretar esta norma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

11 Entre los principios fundamentales en que se fundamenta la Convención Americana está el reconocimiento de que los derechos y libertades protegidos por ella derivan de los atributos de la persona humana. De este principio deriva el requisito básico que sustenta a la Convención en su conjunto, y al artículo 5 en particular, de que los



individuos deben ser tratados con dignidad y respeto. En consecuencia, el artículo 5(1) garantiza a toda persona el derecho a que se respete su integridad física, mental y moral, y el artículo 5(2) exige que toda persona privada de su libertad sea tratada con el respeto inherente a la dignidad de la persona humana.

La serie continuada de actos que han sido descritos en la parte expositiva de esta demanda, me han producido una profunda aflicción y una gran afectación psicológica. En este contexto, por la enorme presión a la que me encuentro sometido, y la desesperación y angustia que aumentan al ver que se insiste en la persecución en mi contra me producen un enorme daño, personal y psicológico.

V Respecto del daño causado y la necesidad de indemnización del daño moral.

La ley laboral contempla el derecho del trabajador a obtener un conjunto de indemnizaciones en caso de vulneración de derechos fundamentales por el daño objetivo que se causa a quien pierde su fuente laboral. En este caso, la relación laboral se encuentra vigente, aunque amenazada, sin perjuicio de lo cual el daño causado con las conductas denunciadas es objetivo y permanente. Por lo mismo, estimo un deber ciudadano exigir complementariamente aquella indemnización por daño moral porque el mal causado es de extrema gravedad, y puede prolongarse en el tiempo.

La máxima autoridad de la Universidad, autoridades académicas que son mis pares, me han sometido a sumarios y humillaciones, que han hecho públicas de manera injusta y agravante por razones de mis opiniones en el ámbito académico, que por su naturaleza interesan y son motivo de discusión de manera directa, no sólo al interior de la comunidad académica y/o universitaria, sino también a nivel de una sociedad cada vez más pluralista y abierta. Con ello no sólo se ha afectado mi (el) derecho inherente a toda persona especialmente en el ámbito académico, como es la libertad de expresión y de opinión, sino también la libertad de cátedra, la dignidad y honor de miembros de la comunidad, y se han permitido abusos de poder de la autoridad y la discriminación entre los miembros de la comunidad universitaria.

La condena en un sumario espurio, iniciado a petición del Rector Alvaro Rojas, en que se me imputa como incumplimiento de Reglamentos Universitarios las opiniones vertidas públicamente respecto del gobierno universitario, junto al hecho de haberse iniciado dos nuevos sumarios en mi contra, el uno por un supuesto abuso de poder respecto de una estudiante que había incurrido en una falta de honestidad académica, pese a que se había descartado en una investigación previa - también incoada de manera arbitraria - que hubiera existido de mi parte alguna conducta reñida con el quehacer académico, son muestras evidentes de un acto de acoso laboral,



vulneratorio de derechos fundamentales, que no puede ser tolerado y el segundo y más reciente, por una denuncia de un imaginario "encontronazo" con un profesor, hecho absolutamente falso.

Los hechos que he descrito, constituyen una vulneración grave de mis derechos fundamentales por parte del empleador. La relación laboral es contractual, bilateral, concierne a dos partes. Es un punto de encuentro entre seres humanos, libres e iguales en dignidad. Las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona, prescribe el inciso 2o del artículo 2 del Código del Trabajo.

La doctrina y la jurisprudencia concuerdan que la relación laboral se encuentra marcada por su contenido ético, es decir, por el imperio de ciertos principios que las partes deben respetar. Así, los contratantes se encuentran obligados a actuar con buena fe, con fidelidad, lealtad y honradez, conclusión que permite inferir que la rectitud en el obrar es una obligación que emana de la naturaleza de este contrato.

Con los hechos denunciados se han comprometido valores jurídicos y morales irrenunciables, más aún al interior de una Universidad pública y que se gloria de excelencia. Limitar el derecho de expresión, la manifestación libre de opiniones, interesadas en el mejor desarrollo de la vida universitaria, es inaceptable. Buscar sanciones contra un académico, imputándole abuso de poder, porque con prudencia y ante una falta de honestidad flagrante de una alumna, habló con ésta haciéndole presente la gravedad de su conducta.

El daño causado a mi persona es enorme. Se rompió una vara ética que está en la base de la convivencia social: no hagas a otro lo que no te gustaría que hicieran contigo. Simple y sabia norma que debe guiar la vida buena y por cierto el quehacer en cualquier organización. Esta vara ética es especialmente exigible en una Universidad, que se precia de excelencia y que tiene un papel formador de profesionales para la transformación de la sociedad.

Estimo que como medidas de reparación por el daño moral causado, deben decretarse las siguientes:

- ofrecerse disculpas públicas por parte del Rector de la Universidad y sus autoridades, las que deben ser además hechas públicas como Carta que se publique en el Semanario de la Universidad, sin perjuicio de la publicación de la sentencia que recaiga en esta causa
- ordenarse el pago de la indemnización que fije V.S. en conformidad a lo que dispone el artículo 489 inciso 3, la que no



podrá ser inferior a los once meses de la última remuneración mensual, que pido otorgar por el máximo legal de 11 meses de remuneración.

VI.- Peticiones concretas.

En consecuencia, someto a la decisión de V.S. las siguientes peticiones:

1. Que de acuerdo al inciso 3° del Artículo 495 del Código del Trabajo VS. vele para que la autoridad denunciada se abstenga de toda conducta lesiva a los derechos fundamentales del trabajador denunciante.
2. Que se aplican a la denunciada las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas de este Código, en su máximo legal
3. Que debe remitirse copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro.
4. Que se decretan las medidas concretas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales y de los actos de discriminación de que fui objeto y en especial,
 - a. Que se ordene darme disculpas públicas y publicar la sentencia que recaiga en esta causa en la página Web, en todas las plataformas de comunicación de la Universidad de Talca.
 - b. Que debe crearse un mecanismo de alerta temprana para evitar y sancionar conductas atentatorias a la libertad académica, de opinión y de pensamiento al interior de la Universidad, tal como un Ombudsman que vele por el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria.
 - c. Disponer que como medida de reparación debe pagarse la indemnización que fije V.S. en conformidad a lo que dispone el artículo 489 inciso 3, remuneración mensual, que pido otorgar por el máximo legal de 11 meses de remuneración, mensual.

Que la parte denunciada sea condenada a pagar las costas de la causa.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo señalado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 19 de la Constitución Política de la República y demás normas citadas y/o pertinentes; solicitó tener por deducida Denuncia en Procedimiento de Tutela Laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de la Universidad de Talca representada por su Rector don Alvaro Rojas Marín ambos ya individualizados, darle tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, y en conformidad a lo que prescribe el artículo 495 del Código del Trabajo:



Que de acuerdo al inciso 3° del Artículo 495 del Código del Trabajo VS. vele para que la autoridad denunciada se abstenga de toda conducta lesiva a los derechos fundamentales del trabajador denunciante.

* Que debe crearse un mecanismo de alerta temprana para evitar y sancionar conductas atentatorias a la libertad académica, de opinión y de pensamiento al interior de la Universidad, tal como el Ombus existente en otras universidades para tales fines.

- Que se aplican a la denunciada las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas de este Código, en su máximo legal

- Que debe remitirse copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro.

- Que se decretan las medidas concretas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales y de los actos de discriminación de que fui objeto y en especial,

- Que se ordene darme disculpas públicas y publicar la sentencia estimatoria que recaiga en esta causa en todas las plataformas de comunicación que tiene la Universidad.

- Disponer que como medida de reparación debe pagarse la indemnización que fije el Tribunal en conformidad a lo que dispone el artículo 489 inciso 3, que pido otorgar por el máximo legal de 11 meses de remuneración mensual.

Con costas.

Primer otrosi: El mismo demandante conjuntamente con la acción de lo principal, presento demanda en contra de la parte demandada , corporación de derecho público, representada por su Rector, don Álvaro Rojas Marin ambos domiciliados en calle Quebec N° 415, comuna Providencia, Santiago y en Uno Poniente N° 1141, comuna Talca, para que, en definitiva, se la condene al pago de la asignación de exclusividad que me corresponde, según los antecedentes que expondré, la que no se me pagó entre los meses de Abril de 2017 y Febrero de 2018.

La acción se ejerce en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 489 del Código del Trabajo, que dispone que "S/ de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio[...] El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia".



Estimo que debo ejercer esta acción conjuntamente con la de tutela de derechos fundamentales, ya que de lo contrario podría entenderse una renuncia al cobro de una remuneración que se me adeuda y cuyo pago se me ha negado arbitrariamente, lo que resulta inaceptable.

Fundamento esta demanda en los antecedentes de hecho y derecho que expondré.

Acerca de la remuneración denominada "Asignación de Exclusividad" Requisitos de procedencia.-

Dentro de la Escala de Remuneraciones de la Universidad de Talca, a más del Sueldo Base se establecen diversas asignaciones. Entre éstas, se cuenta la Asignación de Exclusividad que debe pagarse a todos los académicos que imparten docencia exclusivamente en la Universidad y que cumplen con 6 horas semanales de docencia directa en cada semestre académico o 12 horas semanales de docencia directa en un semestre académico. Esta asignación no se otorga si el docente desempeña actividad académica en otra Universidad, salvo si existe un Convenio de Colaboración con dicha institución.

Dado que, como se explicó en la demanda de lo principal, de tutela de derechos fundamentales, ejerzo desde hace muchos años docencia en la Universidad de Talca, esta asignación me fue pagada ininterrumpidamente desde su establecimiento y hasta Marzo de 2017. A contar de Abril de 2017 y hasta febrero de 2018 no se me pagó.

Debo decir que a contar del mes de Marzo de 2018 se me ha pagado la asignación de exclusividad que me corresponde.

> De la suspensión del pago de la Asignación de Exclusividad a contar de Abril de 2017

A comienzos del año académico de 2017 recibí una nota de la Sra. Ximena Letelier del Departamento de Remuneraciones de la Universidad que me comunicaba que a contar del mes de Abril no se me pagaría la Asignación de Exclusividad porque sólo hacía 5 horas de docencia semanal directa.

Ante ello, reclamé por estimar que hay un error de hecho pues cumplía con los requisitos de pago de la Asignación de Exclusividad del año 2017, siendo así infundada la decisión de suspenderme el otorgamiento de esta forma remunerativa.

Hablé con el Director de la Escuela de Ingeniería Forestal, quien me informó que no era efectivo que yo no cumpliera el requisito para el pago de esta asignación, ya que por salidas a terreno con estudiantes y por efecto de un nuevo curso que realizaba, superaba ese estándar y por tanto tenía derecho a exigir el pago de esa asignación por todo el año 2017.



Al no reponérseme esta asignación de exclusividad, el 5 de Diciembre de 2017 remití carta, vía correo electrónico, al Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Ricardo Sánchez, explicando que cumplía el requisito para el pago de la asignación de exclusividad, la que se me había suspendido a partir de abril de 2017. Le planteé, por transparencia, que quizás se me habría suspendido el pago porque había hecho clases ese año en la Universidad de Chile, en el marco de un Diplomado de esa Universidad, preguntando si este hecho podría ser un obstáculo para que se me pagara la Asignación.

Ahora bien, el Diplomado al que me refería se realizó en el año 2017, en el marco de un Convenio de Colaboración entre la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile y la Universidad de Talca, convenio que había sido una iniciativa del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental, que dirijo y que tenía por objetivo desarrollar actividades en el área de los recursos hídricos. El Convenio se firmó el 16 de diciembre de 2016, con varios objetivos, entre ellos el desarrollo y ejecución de programas de desarrollo conjunto. En función de ello, dicté clases en horario de días sábado, y en dos oportunidades en el Diplomado de Recursos Hídricos, en el año 2017.

El día 7 de diciembre de 2017 recibí respuesta del Director Jurídico, Ricardo Sánchez, en la que señala que el DU 19 de 2016 establece entre otras condiciones que "el académico del cuerpo regular no podrá desarrollar actividades remuneradas de carácter académicas en otras instituciones de educación", agregando no obstante que estarán exceptuadas de dicha limitación "aquellas actividades que se realizan en el marco de un convenio o alianza suscritos previamente entre la U de Talca con otras instituciones de educación" Yo le había agregado el Convenio con la Universidad de Chile, pero me planteó que este proyecto involucraría recursos de terceras fuentes y eso implica un convenio específico, y por tanto no correspondía el pago. Asimismo el Sr. Sánchez me planteó que el Diplomado no es un post grado.

El día 12 de diciembre le respondí a Ricardo Sánchez, explicando que el Convenio no habla de Diplomados pero sí de Programas de post grado y también de eventos de difusión y transferencia científica tecnológica y educativa. En un segundo aspecto le planteo que el diplomado ofrecido por la U. de Chile involucra recursos propios y no de terceros que ameriten un convenio específico. En tercer lugar le señalo que las clases fueron hechas fuera de horario y, que por tanto debe proceder el pago de la asignación. El mismo día 12 de diciembre, me responde Ricardo Sánchez señalando que se aclara lo del horario en que fue hecha la clase, pero por otra parte y dado que



no existen recursos de terceros comprometidos, solicita copia de la Resolución mediante la cual se crea el Diplomado.

Con fecha 3 de enero respondí nuevamente a Ricardo Sánchez, entregando copia del documento de creación del diplomado. El día 25 de enero éste me respondió señalando que si bien existe instrumento entre la U. de Talca y la U. de Chile, el Diplomado no es parte del mismo.

Con fecha 15 de marzo, le envié correo en que le hago saber que el diplomado calza en más de un ítem en el Convenio con la U. de Chile. El día 3 de abril me responde Sánchez reiterando conceptos anteriores, pero no dando respuesta a lo planteado en el correo del 15 de marzo.

El día 26 de abril le hago llegar un nuevo documento a Sánchez, firmado por el director de post grado de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Chile, mediante el cual se señala que el diplomado es parte de las actividades contenidas en el Convenio de colaboración.

El día 18 de mayo contesta Sánchez, señalando que "lo que se acompaña no es un certificado ni una resolución aprobatoria del diplomado", hecho que ya había sido enviado antes y no hay dudas de que el diplomado es una instancia de trabajo en el marco del Convenio firmado.

El día 5 de septiembre, en un extenso correo le señalo lo siguiente:

"Estimado: en relación a la consulta referida a mi asignación de exclusividad del año 2017, la cual aún se encuentra no otorgada por el parecer de tu unidad jurídica, he hecho diversas averiguaciones y análisis en este tiempo, y todo apunta a lo siguiente que te paso a señalar:

- a) No existe ninguna duda de que el Diplomado en Recursos Hídricos que dicta la Universidad de Chile es parte del convenio de colaboración suscrito entre la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Chile y la U. de Talca, como así lo asegura según constancia ya enviada, el Director de Postgrado, Dr. Horacio Bown, Aún más, señala que este es uno de los productos surgidos del convenio, entre otros.
- b) El cuestionamiento de que el Diplomado fuese financiado con recursos de terceros ya fue descartado, toda vez que su funcionamiento obedece a fondos propios de la U. de Chile, y por ende no es un argumento para negar la asignación.
- c) El que no se plantee explícitamente la palabra Diplomado, es un elemento que es parte de la interpretación. Para la U. de Chile, el cursar dos o tres diplomados, más una tesis puede constituirse en un magíster y de ahí la importancia del Diplomado como parte del post grado. En el caso nuestro, el Diplomado no es un post grado, como acertadamente lo señalas, pero al ser parte de la U. de Chile, entra en el



contexto de las actividades conjuntas que son posibles de llevar a cabo. No obstante, si nosotros como U. de Talca no consideramos el Diplomado un post grado, ya se ha señalado que cabría en una actividad de extensión educativa en el marco de los recursos hídricos, (Organización de eventos de difusión y transferencia científica, tecnológica y educativa en el marco del medioambiente y de los recursos hídricos), hecho que lo señala claramente el convenio firmado entre ambas instituciones.

d) Se solicitó el instrumento administrativo, aunque no se entiende para qué, que dio creación al Diplomado en el Consejo de Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Chile, y este se hizo llegar. En el mismo se da cuenta de la creación del programa y de su nombre, programa desarrollado por Ja U. de Chile y apoyado por la U. de Talca, para lo cual no se requiere algún convenio como en el caso del Magíster conjunto entre dos universidades

e) Cuando se ha hecho referencia a un convenio en el marco de los programas de Magíster, ese es un convenio específico que debe ser firmado por ambas instituciones, pero no porque el convenio existente y ya aludido no otorgue el debido marco para su realización, sino por exigencia de la Comisión Nacional de Acreditación. En este caso se pensó en un inicio en un magíster conjunto, pero se vio que habían trabas importantes para ello. Por eso a posteriori se decidió separar los programas y cada universidad desarrollará el suyo, con el apoyo de la segunda.

Por tanto y visto que el Diplomado es parte del convenio de trabajo conjunto entre la U. de Chile y la U. de Talca, se piensa que la asignación de exclusividad del año 2017 corresponde que sea pagada a mi persona, porque en todo momento se ha mantenido la filiación U. de Talca; el diplomado y otras actividades han sido parte del convenio; no existen recursos comprometidos de terceros; y se han cumplido todas las exigencias académicas y administrativas para el pago de dicha asignación.

Termino diciendo: "te solicito me puedas especificar qué antecedentes consideras se deben agregar para proceder al pago de la referida asignación, toda vez que todos los cuestionamientos por ti planteados, se considera que han sido debidamente respondidos".

Ricardo Sánchez, por la misma vía, me respondió con fecha 5 de octubre de 2018, que no se han agregado nuevos antecedentes y que no procede el pago. Sin embargo, no responde a la pregunta que dice qué antecedentes son los que deberían agregarse.

Sin embargo hasta la fecha de presentación de esta demanda no se me ha pagado la Asignación de Exclusividad, que debió pagarse entre Abril de 2017 y Febrero de 2018, de manera arbitraria y sin razón jurídica para ello.



Si bien, inicialmente pudo existir causa de error para estimar que ella no era procedente, posteriormente se demostró que sí me correspondía, tanto por reunirse el requisito de procedencia de su pago, ya que cumpla más de 6 horas semanales de docencia directa en cada semestre académico, como porque mi desempeño como académico en el Diplomado al que me he referido se cumplió dentro del marco de un convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile y la Universidad de Talca, debidamente suscrito con anterioridad a la realización de los cursos.

Debo señalar que, tal como expliqué en la demanda de lo principal, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la persona de Ricardo Sánchez Venegas está detrás de todos los sumarios persecutorios que he sufrido por lo que estimo que negárseme el pago de esta Asignación, después que lo exigí y demostré su procedencia, es un hecho indiciario del acoso que he sufrido.

Peticiones concretas,

En virtud de los antecedentes que se han expuesto y que se acreditarán en el curso de este juicio, no cabe duda que me corresponde el pago de la Asignación de Exclusividad que forma parte de las remuneraciones de los Docentes de la Universidad de Talca que cumplen los requisitos que exige la norma que rige dichas remuneraciones, entre los cuales me encuentro, por lo que, no habiéndose pagado dicha Remuneración entre los meses de Abril de 2017 y Febrero de 2018, de manera arbitraria, pido ordenar su pago.

El monto de la asignación que reclamo asciende a \$ 300.000 mensuales, suma que pido ordenar se pague, por los 11 meses que no se pagó, esto es, entre Abril de 2017 y Febrero de 2018, con los reajustes e intereses que señala el artículo 63 del Código del Trabajo.

Por tanto, con lo expuesto, lo que prescriben las normas de los artículos 489 y siguientes, artículo 41 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 63 del Código del Trabajo, normativa sobre remuneraciones de la Universidad de Talca, y demás normas citadas y aplicables, solicitó tener por interpuesta conjuntamente con la denuncia de lo principal, demanda en contra de la Universidad de Talca corporación de derecho público, representada por su Rector, don Álvaro Rojas Marín ambos domiciliados en calle Quebec N° 415, comuna Providencia, Santiago y en Uno Poniente N° 1141, comuna Talca, para que, en definitiva, se la condene al pago de la asignación de exclusividad que me correspondía, entre los meses de Abril de 2017 y Febrero de 2018, la que no se pagó pese a ser ésta procedente, por la suma de \$



300.000 por cada mes calendario (11 meses), con reajustes e intereses legales y costas.

De la contestación de la demanda, sus fundamentos y pretensiones. Mauricio Lozano Donaire, Abogado, Cédula Nacional de Identidad 10.650.303-6, domiciliado para estos efectos en Rosario Norte 615, piso 22, Santiago, en representación de la demandada Universidad De Talca, persona jurídica del giro de su denominación, RUT 70.885.500-6, con domicilio en calle 1 poniente 1141 de Talca en autos sobre tutela laboral, caratulados “Pizarro con Universidad de Talca” RIT T-1938- 2018, a US con respeto digo:

Que estando dentro de plazo y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 491 en relación al 452 del Código del Trabajo, vengo en contestar la demanda formulada en autos en contra de mi representada, Universidad de Talca, solicitando el rechazo de la misma, con costas, atendido a los siguientes fundamentos:

I. - Cuestiones previas: incompetencia del tribunal, inadmisibilidad de la acción, y caducidad de la misma.

De manera previa a entrar a contestar el fondo de la acción de tutela de derechos fundamentales deducida en estos autos, no podemos dejar pasar por alto cuestiones vinculadas a las forma de llevar adelante este proceso y que necesariamente influirán en los resultados del mismo, a saber:

Incompetencia del Tribunal

Incompetencia relativa

Oponemos en primer término, previo a entrar a lo relativo a la incompetencia en relación a la materia, una cuestión de previo y especial pronunciamiento cual es la incompetencia del Tribunal de SS. en relación al territorio, a saber:

1. - La competencia relativa como bien lo sabe S.S. es lo que ayuda a determinar cuál tribunal es competente entre tribunales de igual clase o jerarquía. Los Juzgados de Letras del Trabajo son de igual jerarquía entre ellos, pues tienen idéntica competencia absoluta. Por lo tanto, son las reglas de la competencia relativa las que determinarán en definitiva cuál Juzgado de Letras del Trabajo conocerá del asunto. El artículo 423 del Código del Trabajo (CDT) faculta al demandante para deducir la acción laboral a su elección ante uno de los siguientes tribunales:

- a) El correspondiente al domicilio del demandado.
- b) El del lugar donde se presten o hayan prestado los servicios.

2. - De acuerdo a lo anterior, y de lo señalado por el propio demandante, es que está acción es presentada en el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por estimar que ejerce sus funciones en aquella ciudad y además por considerar que la



Universidad de Talca cuenta con domicilio en la misma.-

El actor, aparece domiciliándose en la ciudad de Santiago, al mismo tiempo que señala que el domicilio de Universidad de Talca, sería la ciudad de Santiago.-

Del mismo modo expresa que sus servicios los presta “tanto en Talca como en Santiago”.-

Estos asertos, en virtud de los cuales el actor pretende afincar la competencia en el Tribunal de SS., son, a lo menos, inexactos.-

3. - En efecto, por lo mismo es que venimos en oponer la excepción de incompetencia relativa. Mi representada, cuenta con una pluralidad de domicilios, pero sin que por ellos se pueda desconocer de manera antojadiza que su casa matriz se encuentra en la ciudad de Talca, específicamente en calle 2 norte número 685, y hoy en calle 1 poniente 1141 de la misma ciudad.-

No podemos soslayar SS. que mi representada es una institución de derecho público creada por ley, según consta en el DFL 36, del Ministerio de Educación, del año 1981, y que es el mismo cuerpo legal el que se encarga de señalar en su artículo 2°, que el domicilio de mi representada es, precisamente, la ciudad de Talca.-

De acuerdo a lo anterior, habrá de descartar entonces, primeramente, una de las hipótesis en torno a las que gira la norma del artículo 423, al estar fijado el domicilio de mi representada en la ciudad de Talca y la demanda fue presentada en Santiago.-

4. - Tampoco es dable aceptar la tesis que pretende imponer el actor en orden a que sería competente un Tribunal de Santiago, bajo la premisa de que la prestación de los servicios se realizaría -en idénticos términos- en Talca y en Santiago.-

Ello, como dijimos, en cuanto menos inexacto.-

En efecto, no es posible soslayar SS. que tratándose mi representada de una institución pública, creada por ley, la relación que ella tiene con sus servidores operan al amparo de las normas del derecho administrativo, emanando de un acto de nombramiento, que define tanto las funciones así como en las escala de sueldos y otros aspectos básicos de la relación contractual.- Siendo así, y por aplicación de su nombramiento, las actividades desarrolladas por el Sr. Pizarro están radicadas en la ciudad de Talca, que es el lugar en donde presta y debe prestar sus servicios.- Lo anterior, no obsta por cierto a que eventualmente pueda prestar algún servicios específico vinculado a la docencia o a la representación de la Universidad, de manera ocasional y específica, en la ciudad de Santiago, pero ello no alcanza como para estimar que los servicios los preste “tanto en Talca como en Santiago”, así como lo pretende. - Tanto es así, que como el mismo actor lo reconoce, su nombramiento y adscripción está vinculada a una facultad que tiene su sede en Talca, y es por lo



mismo que cuando el actor debe trasladarse a la ciudad de Santiago, por cada viaje que realiza el Sr. Pizarro se le entregan dineros para viáticos y movilización, lo que se respalda con las resoluciones de cometido funcionario, que se acompañan en el otrosí.-

Lo anterior acredita de manera palmaria que el lugar de la prestación de los servicios para estos efectos es Talca pues de lo contrario podría estimarse que el recibir cometidos funcionarios y viáticos para trasladarse a Santiago, constituiría una falsedad constitutiva incluso de alguna figura de tipo penal, como podría ser un eventual fraude al Fisco.-

¿Porque entregarle viáticos para viajar a Santiago, si en tu tesis presta servicios en Santiago?

El lugar de los servicios SS., no es otro que Talca.-

5. - En último término US. tampoco es atendible el domicilio que el actor dice tener.-

En efecto, a los fines propios del derecho laboral, es útil recurrir a lo dispuesto en el artículo 10 CDT, que marca un principio ciertamente útil, cual es el domicilio que el actor tiene registrado.-

Hemos dicho, que habrá en nuestro caso de estarse a la relación de derecho administrativo, pero ello no quita recurrir a esta norma que ciertamente alumbra la cuestión que nos ocupa.-

El nombramiento del Sr. Pizarro para prestar servicios en Talca, considera además que el domicilio del mismo se halla en calle Carlos Gesswein, Jardín Esmeralda, Talca, lo que consta en certificado emanado por el secretario general de la Universidad de Talca don Rodrigo Palomo Velez.-

Es decir, el domicilio que el actor tiene registrado en su relación contractual con la Universidad es precisamente Talca no Santiago.-

Es más, incluso en diversos actos administrativos, como el reclamo deducido ante la Contraloría Regional del Maule, registran precisamente el domicilio dado por el actor: Talca.-

6. - Así las cosas S.S., no se cumple por la parte demandante ninguno de los criterios exigidos en el artículo 423 del Código del Trabajo en cuanto al lugar donde se debe presentar la demanda, no cumpliendo con las hipótesis planteadas en él -de acuerdo a lo ya mencionado-. Yendo más lejos S.S., tampoco nos podemos ubicar en el escenario de considerar que el empleo que ejerce el Sr. Pizarro es itinerante y por tanto aplicable lo señalado en el inciso final del artículo 10 inciso final del Código del Trabajo, pues la naturaleza del empleo de profesor denota todo lo



contrario, reafirmando nuestra postura entonces de que el tribunal competente para conocer de esta acción es el radicado en la ciudad de Talca.-

A. 2 Inaplicabilidad del Código del Trabajo a los funcionarios públicos de la Administración del Estado: Incompetencia en relación a la materia.-

De manera conjunta a la petición anterior, en tanto no son incompatibles, ocurre que igualmente existe una cuestión de carácter previo que resolver, cual es si los hechos sometidos a conocimiento de este tribunal son competencia o no de la judicatura laboral.-

1. - Al respecto es preciso tener presente lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, que señala las materias de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, dentro de las cuales no se encuentran aquellas derivadas de la vinculación de los funcionarios públicos con la Administración del Estado,

Lo anterior es de toda lógica, toda vez que la relación existente entre la administración del Estado y su personal no se encuentra regulada en el Código del Trabajo, sino en leyes estatutarias, en la especie la Ley N° 18.834, que en su artículo 1° dispone: “Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los Servicios Públicos Centralizados y Descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente estatuto administrativo.”

2. - Por su parte, el artículo 1° del Código del Trabajo dispone en su inciso 2° que “estas normas no se aplican sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada (...) siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial’. Pues bien, en la especie, el demandante tiene la calidad de Profesor Titular Grado 4 Nivel TI, de la escala II bis de la Universidad de Talca, entidad que es parte de la Administración de Estado, cuyos funcionarios se encuentran sometidos a los estatutos de dicha casa de estudios y al referido estatuto especial contenido en la Ley N° 18.834.-

3. - La Universidad de Talca, es una institución de educación superior, creada mediante el DFL N°36 de 1981.

Interesante resulta citar los estatutos de mi representada, en cuyo artículo 46 dispone “Los funcionarios de la Universidad, sean académicos o administrativos, serán empleados públicos1’.

Es precisamente dicha calidad la que ostenta el actor, quien tiene la calidad de Académico Jornada Completa, grado 4, Calidad de Titular, perteneciente al cuerpo académico regular.-

4. - La contraria pretende en su libelo, hacer creer al Tribunal que es la normativa



del Código del Trabajo la que debe aplicarse, por existir, según su entender, una presunta vulneración a sus derechos fundamentales y basado en ese predicamento, solicita prestaciones e indemnización de carácter laboral y civil, contempladas en ambos cuerpos de leyes.

Con relación a ello se debe expresar a US. que la relación contractual entre la parte demandante con la demandada, está sustentada en el artículo 46 de los estatutos de la Universidad de Talca y en la disposición del artículo 10 del DFL N° 29 de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre estatuto administrativo, esto es, un empleo de planta, señalándose en la correspondiente resolución N°621 de 26 de julio de 2011, que se le contrataba en calidad de Profesor Titular, la cual además señala que tiene una duración hasta el retiro del Sr. Pizarro.

De proseguir con este procedimiento S.S., importa la vulneración de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Pues al efecto, se vulnera el principio de legalidad y de juridicidad, por una errada aplicación del artículo 1, inciso tercero, del Código ya que, conforme a dicho principio, el Código del Trabajo no es aplicable cuando existen estatutos especiales. En la especie, precisamente, no se configura una relación laboral en los términos del Código, sino que existe un régimen de derecho público especial aplicable a la relación entre un funcionario y la Universidad de Talca, correspondiente al contenido en la Ley N° 18.884, sobre Estatuto Administrativo.

Encontrándonos entonces en el contexto de un estatuto especial, se debe hacer relación con el inciso segundo del artículo 1° del Código, que excluye la aplicación supletoria del Código del Trabajo en el caso sublite, por tratarse de un funcionario público de un órgano de la Administración, como lo es la Universidad de Talca, y, por ende, no es pertinente al caso que la judicatura laboral dé curso a la sustanciación de un procedimiento de tutela laboral conforme al artículo 485 del Código, arrogándose facultades que la ley no le confiere. Ello conculca, el principio de supremacía constitucional y los límites de la jurisdicción.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado:

“Vigesimoprimer: Que el inciso tercero del artículo 1° cuestionado se presta para aplicar el Código del Trabajo de una manera reñida con el aludido principio de juridicidad, habida cuenta que da pábulo para suponer una competencia que no les ha sido otorgada expresamente a los tribunales laborales.

Aun siendo efectiva la premisa, de que a los empleados del Estado regidos por el estatuto administrativo de rigor se les aplica supletoriamente el Código del Trabajo, incluso aceptando que esta regulación exógena no requiere ley expresa de remisión,



en todo caso de allí no se extrae lógica y necesariamente la conclusión de que les incumba su tutela a los tribunales laborales.

Por manera que la aplicación expansiva del Código del Trabajo, hecha al amparo de ese indeterminado inciso tercero del artículo 1°, hasta llegar a comprender a funcionarios públicos regidos por su respectivo estatuto, a los efectos de hacerlos sujetos activos del procedimiento de tutela laboral, desvirtúa el régimen constitucional y legal que les es propio, amén de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo respecto de una materia en que no han recibido expresa competencia legal.

Es útil mencionar S.S., que durante la tramitación parlamentaria de la Ley N° 20.087 (Boletín N° 3367-13), que incorporó el Procedimiento de Tutela Laboral al Código del ramo, no aparece mención alguna en orden a hacerlo aplicable igualmente a los funcionarios públicos, vale decir, más allá de las relaciones contractuales comunes entre trabajadores y empleadores.

Y en concordancia con lo recién mencionado, es que con fecha 13 de diciembre de 2018, se presentó un proyecto de ley -boletín N° 12.308-06- que busca modificar la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para hacer aplicable a los funcionarios el procedimiento de tutela laboral regulado en el Código del Trabajo. En la misma línea ingresaron al Congreso otros tres proyectos de ley sobre igual temática, uno que modifica el Código del Trabajo para garantizar la aplicación del procedimiento de tutela laboral a funcionarios públicos (boletín 12364-13), y dos que interpretan normativa de dicho código en relación al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral (boletines 12322-13 y 12365-13). Así las cosas S.S., se entiende que la actual normativa no permite extender la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos, así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y así lo entienden los legisladores que buscan una reforma al respecto.-

En consecuencia, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho expuestos y, en especial, de lo dispuesto en los artículos 1° y 420° del Código del Trabajo, 3 y 10 del Estatuto Administrativo, artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República y artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, solicitó a SS. declararse incompetente absolutamente para conocer de las acciones deducidas en autos.

A. 3 Incompetencia en relación a la materia. Hay pretensiones del actor que escapen a este procedimiento: Tribunal Laboral no es competente para conocer pretensiones sobre daño moral.-

En subsidio de las excepciones anteriores, para el caso de que SS. estime que tiene competencia para conocer de la acción de Tutela, oponemos en lo que respecta a la pretensión de daño moral una excepción de incompetencia en los siguientes



términos.-

En efecto SS. el artículo 420 letra a) del C. del T. establece que son competencia de los Juzgados del Trabajo: “las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores” pero siempre que ellos tenga lugar “por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

3. - A este respecto, es ya doctrina constante en nuestra jurisprudencia, que los Tribunales del Trabajo no tienen competencia para conocer de demandas por daño moral.

En efecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que “las instituciones correspondientes a la indemnización por falta de aviso previo y por años de servicio, propias del derecho laboral, constituyen los únicos resarcimientos que la ley contempla, originados en la relación de trabajo que unió a las partes y en su conclusión irregular.² En el mismo sentido, la Excma Corte Suprema ha señalado que “Tercero: Que en lo atinente al daño moral que le habría provocado al actor el hecho del despido y sus funciones, ha de considerarse que habiendo establecido el legislador laboral indemnizaciones objetivas al efecto, aquél resulta improcedente en un juicio de esta naturaleza

4. - El criterio jurisprudencial citado tiene, además, antecedentes en la historia de la ley, que no pueden ser soslayados. Estos argumentos y antecedentes son tan claros que demuestran que estas acciones no saben en sede laboral, sin perjuicio, además, de su improcedencia en cuanto al fondo.

La Competencia de los Juzgados del Trabajo fue profusamente debatida durante la discusión de la Ley N° 20.087. Es más, en el artículo N° 1 letra b) del texto del Mensaje Presidencia por el cual se presentó el proyecto de ley (20.087) se contemplaba expresamente la competencia de los jueces laborales para pronunciarse sobre cualquier otra responsabilidad, incluso daño moral, sin embargo, estas normas de carácter “orgánicas constitucionales” no alcanzaron el quórum de aprobación requerido en la votación general del proyecto de ley, por lo que no fueron considerados en la aprobación del proyecto de ley.

De la historia de la ley, queda en claro, entonces, que los Tribunales del trabajo carecen de competencia para conocer de las demandas por daño moral por supuestos daños morales relacionados con actos anteriores, coetáneos o posteriores al despido.

Aún más, demuestra la incompetencia señalada, la moción parlamentaria presentada por el Diputado Letelier, con fecha 11 de septiembre de 2007, Boletín N° 5336-13, en



la que presenta un proyecto de ley para incluir la reparación del daño moral en materia laboral. Claramente, si se ha tenido que presentar un proyecto de ley es porque actualmente no existe tal competencia.

1. - Además de los argumentos señalados anteriormente, es necesario tener presente que cuando el legislador ha querido que los Juzgados del Trabajo tengan competencia para conocer de acciones por daño moral, así lo han señalado expresamente. Es lo que sucede en el caso de los accidentes del trabajo, donde por ejemplo, en la letra b) del artículo 64 de la Ley N° 16.744, señala expresamente que los Juzgados del Trabajo tienen competencia para conocer de la demanda por daño moral derivada de accidente o enfermedad profesional. Además, demuestra la excepcionalidad de ese caso, el hecho de que la propia Ley N° 16.744 identifica esa acción como netamente civil y que, por excepción, en el caso de accidentes y enfermedad, se puede conocer por un juez del trabajo. En efecto, dicha norma señala que la acción de daño moral se rige por “las prescripciones de derecho común”. Esto es, el derecho civil, lo que demuestra que naturalmente se trata de acciones civiles, que salvo texto expreso de la ley, son de competencia de los juzgados civiles ordinarios.

2. - Ahora, si lo pedido se trata no de una indemnización por daño moral sino que de la indemnización especial del artículo 489 del CDT -lo que no tenemos claro dado los términos ambiguos de la cosa pedida y la causa de pedir-, dicha pretensión es del todo improcedente tratándose de un caso en que el actor mantiene el vínculo contractual, tal cual lo abordaremos más adelante-.

Inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de requisitos de forma.

3. En subsidio de las excepciones de incompetencia relativa y de la absoluta deducidas en los acápites anteriores, oponemos la excepción de inadmisibilidad de la demanda deducida por adolecer esta de una falta en los requisitos de forma que ha debido observar

4. - La presente demanda de tutela de derechos fundamentales, deberá ser declarada inadmisibile por cuanto no ha cumplido con un requisito esencial establecido expresamente en el Código del Trabajo para su procedencia.

En efecto, el artículo 490 del Código del Trabajo estableció un requisito que debe cumplir la demanda de tutela, el que es absolutamente insoslayable: “La denuncia deberá contener, además, de los requisitos generales que establece el artículo 446, la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada acompañándose todos los antecedentes en los que se fundamente. En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de 5 días para su incorporación”.



5. - Esta disposición es de orden público y consagratória de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 3° de la Constitución y del principio legal de la bilateralidad de la audiencia y buena fe establecidos en el artículo 425 del Código del Trabajo. De esta forma, si tales requisitos no se han cumplido en la denuncia, esta no puede prosperar y deberá ser rechazada por el Tribunal, pues no se trata de requisitos facultativos o que se puedan suplir por el sentenciador. Se trata de requisitos fundantes de la acción misma de tutela sin los cuales ésta no puede prosperar.

Así, los requisitos adicionales y obligatorios que exige la ley, en el caso de la demanda por tutela de derechos fundamentales, son los siguientes: a) la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada y b) acompañar todos los antecedentes en los que se fundamente.

6. - Pues bien SS. analizado el libelo, queda en evidencia que el propósito de esta demanda no es más que desnaturalizar la acción, al ser sólo un camino para obtener pretensiones indemnizatorias -como se desprende de parte de las peticiones que se encuentra en lo principal-, y que además no cumple con el requisito de la enunciación clara y precisa de los hechos.

7. - En efecto SS, la demanda no contiene un atisbo de enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración de derechos alegada, pues se hace una mención antojadiza de fechas, lo que claramente va en conexión al cuidado de su acción y el periodo de caducidad de la misma, lo que se verá en apartados más adelante. En el libelo el actor se dedica a contar su historia contractual con la Universidad de Talca desde el año 1989 hasta la actualidad, describiendo una serie de supuestos actos perjudiciales para él desde el año 2017, pero sin determinar una fecha cierta para aquellos actos vulneratorios, lo que repercute directamente con el principio y garantía constitucional de la debida defensa que gozamos.

Claramente SS. cuando la acción de tutela de derechos fundamentales ha caducado- tal como desarrollaremos en el capítulo siguiente-, no conviene exponer con claridad los hechos que se invocan para sostener la acción.

B. Excepción de Caducidad de la Acción.

Subsidiariamente a las demás excepciones previas oponemos la de caducidad de la acción, la que se basa en los siguientes argumentos:

1. - Esta parte opone la excepción perentoria de caducidad de la acción de tutela de garantías fundamentales, atendido que la misma fue interpuesta una vez transcurrido con creces el plazo establecido por la ley.

La caducidad es concebida como una sanción perentoria a la inactividad de una parte



en el ejercicio de la acción respectiva, dentro de plazo fatal establecido por la ley, y que repercute en la extinción de la misma acción, sanción que ha de entenderse como de derecho estricto y no de aplicación analógica o extensiva. Así, ha de mediar siempre norma expresa que imponga, clara y precisamente, la sanción de caducidad. En efecto, de acuerdo a lo expresamente previsto en el inciso final del artículo 486 del Código del Ramo “La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168”.

En el caso sublite, el demandante, durante todo el tiempo que ha sido una supuesta víctima de las situaciones descritas en su libelo como constitutivas de vulneración de derechos, no ha deducido denuncia alguna ante la Inspección del Trabajo respecto de los hechos de que se ocupa en su demanda, de tal forma, que respecto del plazo para deducir la acción de tutela de autos, no se ha producido suspensión en la forma prevista por el artículo 168 del C. del T.

2. - En la especie, tal como lo anunciamos a propósito de la inadmisibilidad de la demanda por no cumplir con requisitos de forma, el actor no ha señalado una fecha cierta en que se inició esta serie de actos permanentes y reiterados en el tiempo.

En efecto SS. del análisis en la demanda, específicamente en el denominado capítulo I “sobre la procedencia de la acción de tutela laboral”, el actor se limita a señalar a propósito de la concurrencia de la acción que “esta persecución comienza una vez que el actual rector, Alvaro Rojas Marín, es reelecto en esa función y luego de reasumir en el cargo por nuevo mandato, en marzo de 2018” para terminar señalando en el mismo apartado que “todo lo denunciado ha ocurrido en el curso del año 2018 y se extiende hasta el presente”, no haciendo mención precisa sobre el origen del acto supuestamente vulneratorio.-

3. - Sin embargo, atendido el relato del actor y haciendo un esfuerzo por desentrañar la época en que se inició la supuesta vulneración de derechos, nos encontramos en el capítulo I de la demanda, un apartado donde se hace un análisis de la forma en que ciertos actos fueron vulnerando supuestamente sus derechos fundamentales.

Así, el demandante señala que “Con el primer sumario, claramente se lesiona el derecho fundamental de la libertad de emitir opinión (artículo 19N°12, inc. 1°) (...) Con el segundo sumario, se lesiona mi derecho a la honra (artículo 19N°4), pues se busca mi descredito personal y como académico. (...) Con el tercer sumario, se vulneran mi



derecho al respeto a la vida privada (artículo 19N°4) y a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (artículo 19N°5) tanto como mi derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N°1) (...) En este mismo cuadro, como una manifestación más de la vulneración de mis derechos fundamentales, arbitrariamente, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Talca, cuyo director es el abogado Ricardo Sánchez, unidad que ha participado de todos los actos persecutorios de que he sido víctima se ha negado a resolver una injusta situación de suspensión del pago de una forma remuneracional que tienen los académicos que hacen un número determinados de horas de clase. Como se explica en el primer otrosí de la presente acción judicial durante el periodo académico del año 2017, me fue suspendido el pago de la asignación de exclusividad, desde abril del año 2017 a marzo de 2018(...) Si a todo lo expuesto en forma sucinta agregamos la decisión de invisibilizarme por parte de la dirección de comunicaciones, discriminándome, durante el año 2018 (...).".

De lo citado, entendemos que el actor acusa una serie de actos vulneratorios, lo que en su conjunto él estima configuran acoso laboral.

Pero de acuerdo al mismo relato realizado por él, es que entendemos que cada acto por si sólo configuraría un acto vulneratorio de derechos, por lo que los plazos para interponer la acción de tutela de derechos varían según el acto al cual nos referimos.-

4. - En el sentido anterior, y siguiendo con el esfuerzo por descubrir el origen de los hechos supuestamente vulneratorios, ocurre que tampoco ayuda mucho al actor aquellas cuestiones que latamente se esfuerza en exponer en su capítulo III titulado "Relación Circunstanciada de los Hechos".-

En efecto, avanzando en cada uno de los acápites de este capítulo V.S. podrá comprobar que ellas en general se refieren a hechos ostensiblemente anteriores al periodo otorgado por la ley para deducir esta acción.-

De este modo:

- Cuando el actor habla del sumario incoado en razón de opiniones críticas vertidas en relación a la elección del Rector de la Universidad de Talca, se refiere al sumario que le fue notificado -la formulación de cargos- con fecha 4 de junio de 2018, por lo que entendemos que está con creces excedido el plazo para exigir la tutela del derecho vulnerado con aquel acto.- Cuando el actor se refiere al segundo sumario, refiriéndose a que trata sobre imputaciones falsas por un supuesto acto de abuso de poder, y que a través del cual se lesionó su derecho a la honra, debe tener presente S.S. que de acuerdo al propio relato del actor, este tuvo conocimiento de dicho procedimiento disciplinario en fecha 8 de junio de 2018, y con fecha 27 de septiembre



de 2018 de que aquel procedimiento se elevó a sumario administrativo. En ambos casos S.S. el plazo para exigir la tutela del supuesto derecho vulnerado se encuentra caducado.-

- Cuando el actor se refiere a la invisibilización en las plataformas comunicacionales de la Universidad, entendiéndola como una forma de exclusión, se menciona detalladamente por parte del actor el proceso por el cual se tuvo que pasar para poder obtener la cátedra de la Unesco sobre hidrología, relatando finalmente que aquel logro no fue publicitado por la Universidad y que es manifestación de la invisibilización junto al hecho de que no hubo difusión de un premio que recibió de la Corporación Chilena de la madera como investigador destacado del año 2017. A lo dicho, y haciendo un análisis exhaustivo para identificar una fecha que pudiera estimarse como constitutiva de una violación, lo cierto es que es la misma vaguedad en el modo de proponer los hechos la que impide encontrar una fecha cierta.- Si el actor reclama no haberse publicado una figuración de él en el mes de abril de 2018, ocurre entonces que al menos desde aquella fecha tenía a su disposición esta acción.- Esto, en el caso que se tratara de la adjudicación de la cátedra de la Unesco sobre hidrología y la entrega del premio a investigador destacado que ocurrió el 10 de agosto del año 2018. En base a lo anterior, S.S. puede fácilmente extraer que la acción que emana para la protección de supuestas vulneraciones de derechos de aquellos hechos se encuentra totalmente caducada.-

Como V.S. podrá comprender, todo el argumento de la contraparte lo hace girar en una serie de alegaciones inconexas entre sí, pretendiendo reclamar por cada uno de ellos y a su vez que sean considerados una unidad.-

Basta seguir el hilo conductor del reclamo para observar que primero reclama sobre cada uno de los sumarios llevados en su contra, luego de la supuesta invisibilización, después menciona como antecedente el no pago de asignaciones por exclusividad, sin perjuicio de que acciona en un otrosí al respecto.-

En resumen, todos estos hechos, además de inconexos han ocurrido más allá de los 60 días que dispone la ley, razón por la cual la acción incoada adolece del vicio de caducidad que alegamos.-

5. - Dado lo anteriormente expuesto y en consideración a que la data de los hechos en que se funda esta excepción constan claramente en el proceso y específicamente en las expresiones vertidas por el actor en su libelo, SS. no podrá más que acoger la excepción de caducidad interpuesta por esta parte, en razón de que han transcurrido con creces los 60 días desde que ocurrieron los hechos en que el actor sustenta la vulneración de sus derechos.



A.- Antecedentes de la demanda de autos.

1. - Como consta en el proceso, comparece don Manuel Pizarro Tapia, quien deduce en contra de Universidad de Talca demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, demandando además un eventual daño moral con los fundamentos que para cada pretensión expresa.

2. - En específico, en lo que atañe a la tutela por vulneración de derechos, la pretensión procesal manifestada por el actor puede resumirse en las siguientes:

- Que mi representada se abstenga de toda conducta lesiva a los derechos fundamentales del Sr. Manuel Pizarro Tapia.~ Que se apliquen en contra de mi representada, las multas a que hubiere lugar en el Código del Trabajo, en su máximo legal.~ Que debe remitirse copia de la sentencia que se dicte en autos a la Dirección del Trabajo.~ Que con la finalidad de decretar medidas concretas para obtener la reparación de la vulneración de derechos fundamentales, el Sr. Pizarro solicitar especialmente que:

- Se ordene a mi representada dar disculpas públicas y publicar la sentencia que recaiga en esta causa en todas las plataformas de comunicación de la Universidad de Talca.-

- Que se cree un mecanismo de alerta temprana para evitar y sancionar conductas atentatorias a la libertad académica, de opinión y de pensamiento al interior de la Universidad.~ Disponer como medida de reparación que debe pagarse la indemnización que fije V.S. en conformidad a lo que dispone el artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo.-

3. - Los fundamentos de la acción, y que se construyen a partir de los hechos relatados en los distintos capítulos del libelo, han ocurrido de una manera bien distinta a como se plantea por el actor, razón por la cual, y sin perjuicio de los análisis particulares que haremos en cada capítulo de esta contestación, los negamos completamente de manera expresa y categórica, en tanto nunca ha existido la vulneración de un derecho, y menos en la forma en que se pretende presentar, tal cual se expondrá.-

4. - Para efectos de orden en la exposición de los hechos, los dividiremos en los siguientes capítulos:

- Primer sumario administrativo;
- Segundo sumario administrativo;
- Tercer sumario administrativo;
- Invisibilización comunicacional.-

5. - Además, y a efectos de hacernos cargo de las cuestiones de derecho



alegadas por el actor, ellas se han concentrado en los siguientes capítulos:

- Sumarios cursados contra el Sr. Pizarro se encuentran conforme a Derecho. Imposibilidad que exista vulneración de derechos. - La indemnización solicitada por el Sr. Pizarro no es procedente en medidas de protección que no se funden en el despido.-

B. - En cuanto a los hechos.-

a. i.- Primer sumario administrativo.-

1.- Con respecto al primer sumario incoado en contra del Sr. Pizarro, el cual de acuerdo a sus dichos emana en razón de sus opiniones críticas vertidas por su persona en relación a la elección de Rector en la Universidad de Talca, es correcto precisar ciertas cuestiones que no son señaladas en la demanda presentada y que esclarecen totalmente los hechos.-

Un hecho cierto de la causa, es que con fecha 26 de diciembre del año 2017, el Sr. Pizarro emitió una carta al Director del Diario el Centro, publicada con fecha 26 de diciembre de 2017 y que además participó en un video que circuló por redes sociales y el sitio electrónico llamado “El desconcierto”, donde vierte una serie de opiniones que lesionan el prestigio institucional de mi representada y el de autoridad de la misma. Por lo anterior, el Consejo Académico, advirtiendo dicha situación, en comunicado de fecha 12 de enero de 2018, como consecuencia del Acta N° 768, se deja constancia que por las acciones del Sr.

Pizarro se ha producido un daño inmerecido en contra la Universidad de Talca, señalando en sus términos que “el disenso es absolutamente válido, pero tales diferencias de ningún modo pueden afectar la imagen de nuestra Casa de Estudios”. En virtud de lo anterior, queda en constancia, primero que todo, que el órgano que da cuenta del actuar del Sr. Pizarro es el Consejo Académico y no el Sr. Rector como lo enuncia el demandante, pues como consta en el acta ya citada se señala expresamente que “Estos actos no pueden ser soslayados, y deben buscarse las responsabilidades que ellos ameritan” y de acuerdo a la complementación posterior que consta en Acta del Consejo Académico Extraordinario N°66, de fecha 7 de junio de 2018, en la cual se señala en lo referido al Sr. Pizarro, párrafo cuarto, que “la investigación relativa a los dichos del Prof. Pizarro que se estima podrían afectar la imagen y el prestigio institucional, fue iniciada a raíz de un requerimiento solicitado por el propio Consejo Académico en tanto órgano colegiado superior” .-

2. - Ya dilucidado lo anterior, es que en virtud del Acta emanada por el Consejo Académico, el Sr. Rector de la Universidad de Talca solicitó un informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma casa de estudios, para que se le informara de los



pasos a seguir respecto a estos hechos.

Así las cosas, con fecha 26 de enero de 2018, se evacua informe por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cual se da cuenta que eventualmente puede existir una vulneración al prestigio institucional, en donde potencialmente pueden encontrarse infringidas las siguientes normas:

- Artículo 27 numeral 3 del Estatuto de la Universidad de Talca, el que bajo el epígrafe “De los Derechos y Deberes de los Académicos”, contempla en el referido numeral: “Un académico es un miembro de la Corporación, es un hombre de ciencia y un instructor. Esta especial posición en la sociedad le impone obligaciones especiales, como académico debe prever que el público puede juzgar su profesión y su Universidad por sus declaraciones y acciones. Por tanto, en todo momento, debe ser exacto, veraz, mostrar respeto por las opiniones de los demás, y ser explícito para indicar que él no es vocero de la Corporación a menos que haya sido comisionado especialmente para ello”.- Artículo 8 Ordenanza General del Académico: “Es obligación de todo académico contribuir a resguardar el prestigio de la institución. Por ello, es su deber plantear sus quejas y críticas primeramente ante las unidades competentes de la Universidad y en la expresión de opiniones personales fuera de ella, ser explícito para indicar que él no es vocero de la Corporación a menos que haya sido comisionado especialmente para ello”.-

3. - El Sr. Rector, como es su deber, dio cuenta del informe jurídico al Consejo Académico según consta en acta N° 770 del Consejo Académico, en donde se dispone además que se inicie un sumario administrativo para la búsqueda de eventuales responsabilidades administrativas del Sr. Pizarro, en cuanto los hechos ya indicados anteriormente.-

Con fecha 12 de abril de 2018, en Resolución Universitaria N°483, se instruye iniciar Sumario Administrativo en contra del Sr. Manuel Pizarro Tapia, para esclarecer su eventual responsabilidad administrativa fundada en una infracción a normas internas de la Universidad de Talca. En el mismo decreto se fija como fiscal al Sr. Humberto Nogueira Alcalá, destacado profesor y constitucionalista de la plaza.-

4. - Antes de entrar al análisis de los cargos y el análisis de los descargos producidos en este sumario, lo que resulta de suyo importante porque en cierto sentido las alegaciones allí vertidas se replican como fundamento de esta acción, debemos hacer presente que si bien existe libertad de expresión, ella no ha sido en caso alguno coartada o amagada por el actuar de la Universidad o sus órganos.-

Dicha libertad existe, pero cierto es que no se trata de un derecho absoluto.-

En efecto, debemos tener presente los estándares y delimitación de algunos derechos



constitucionales y humanos, especialmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fija estándares, en la protección del derecho la honra y dignidad personales e institucionales (art.11), complementando el derecho constitucional precisado por el artículo 19 N°4 de la Constitución, por una parte, y por otra, los estándares fijados por el artículo 13 de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, que asegura el derecho a la libertad de expresión y que complementa nuestro artículo 19 N°12 de la Constitución que asegura la libertad de opinión e información.-

En tal perspectiva, el actuar de la Universidad, a través de los distintos órganos e instancias (Consejo, Rector, Dirección Jurídica, Fiscal Administrativo) no ha sido sino el de efectuar una adecuada ponderación de tales derechos -como dijimos libertad de expresión vs derecho a la honra- dada la tensión entre ellos, y luego de precisar el contenido y límites o fronteras de cada uno de ellos, también tienen límites o fronteras, no siendo ninguno de ellos derechos absolutos.

5. - En lo que atañe a la libertad de opinión ella constituye la facultad de que disponen las personas, para expresar de cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, lo que creen, piensan o sienten, a través de ideas y juicios de valor, que por su naturaleza son de carácter subjetivo, pudiendo además intercambiar y debatir acerca de dichas ideas y juicios con otras personas, teniendo como límite o frontera del derecho, el de no emitir expresiones que constituyan descalificación, ofensas, insultos, expresiones vejatorias respecto de personas o instituciones. Asimismo, debemos explicitar que la ley está autorizada para configurar o regular este derecho, sin afectar su contenido esencial, como lo explicita con claridad el artículo 19 N°26 de la Constitución. Es de advertir, en esta materia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Perozo y otros con Venezuela, de 28 de enero de 2009, en su párrafo 117, precisa como estándar que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeta a restricciones, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención”.

La Constitución también asegura el derecho a la libertad de información que también es necesario delimitar adecuadamente, consistente, en pocas palabras, en la facultad que tienen las personas de recibir como la de comunicar, publicar y difundir hechos o acontecimientos, sin censura previa, por cualquier medio y forma, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que se determinen, teniendo este derecho como límites y fronteras, más allá de las cuales ya no estamos ante una protección del derecho, que los hechos relatados sean veraces y de relevancia pública.

La veracidad de la información obliga a las personas y a los medios de comunicación



a no transmitir relatos falsos o claramente con información incompleta, que distorsiona la realidad, sin debida comprobación o un mínimo de actividad investigadora sobre los hechos que se informan o dan a conocer a la opinión pública. El requerimiento de veracidad de la información establece un deber de diligencia de quien proporciona la información, a quién se le puede exigir que lo que transmita como hecho, haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos. La carga de la prueba sobre la veracidad de la información corresponde a quién emite la información sobre tales hechos.

Los supuestos de inexactitud fáctica de la afirmación pueden constituir actuaciones lesivas a la honra de personas, de grupos de personas que conforman un cuerpo dentro de una institución o lesivas del prestigio de instituciones, especialmente cuando hay negligencia al presentar hechos en forma parcial, incompleta o inexacta que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales.

Así entonces, no tratándose este de un derecho absoluto, la Universidad se encuentra en el legítimo derecho (y deber) de efectuar un análisis de los hechos que en ejercicio de esta libertad pudiesen lesionar otras normas que atañen al quehacer Universitario.- Ante estos hecho, las medidas tomadas son las que corresponden.-

6. - Por otra parte, la Constitución también asegura el derecho a la honra de personas e instituciones, en el artículo 19 N°4 de la Constitución, constituyendo la facultad de las personas e instituciones insertas en la sociedad, de exigir que se respete su integridad, la honra se refiere así a la dimensión de heteroestima constituida por el aprecio de los demás por nuestros actos y comportamientos veraces, íntegros, honrados, probos, protegiendo la verdad e integridad de las persona y el prestigio de las instituciones y de sus actos y comportamientos societales. El derecho a la honra implica la posibilidad real de preservar dicha integridad y verdad sobre las personas y las instituciones, su honorabilidad, como asimismo el derecho de no ser ofendido, denigrado, insultado o vejado por terceros. Así, el derecho a la honra constituye un límite externo para el ejercicio de la libertad de opinión.

El derecho a la honra no impone ni determina que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesaria, perfecta y debidamente individualizados ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección de la honra de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas las de substrato personalista, y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honra de las personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de que los



mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa.

En ese sentido no es aceptable la emisión de apelativos que constituyen juicios ofensivos, insultantes, degradantes o formalmente injuriosos en cualquier contexto, completamente innecesarios para la formación de la opinión que se realice supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona y el prestigio de las instituciones. Las ofensas emitidas fuera del discurso y desconectados con el objeto de la opinión se encuentran siempre fuera de la protección de la libertad de opinión.

7. - Teniendo presente lo anterior, durante la tramitación del procedimiento sumarial, según consta en la respectiva formulación de cargos -en donde fueron dos las infracciones constatadas por el Sr Fiscal-, se señaló respecto al primer cargo, el cual consistía en una infracción al artículo 8 de la Ordenanza General del Académico, que no existió prueba fehaciente alguna de que el profesor Manuel Pizarro durante el lapso del año 2017, que es un periodo amplio anterior a sus declaraciones imputadas, realizadas en diciembre de 2017 y enero de 2018, haya cumplido con su deber funcionario impuesto en el artículo 8 de la Ordenanza General del Académico que establece el deber de resguardar el prestigio de la institución, debiendo hacer presente sus quejas y críticas, primeramente ante las unidades componentes de la Universidad, en este caso, en el Consejo Ampliado de su Facultad, ante su Decano o las autoridades superiores de la Universidad, en un tiempo razonable anterior al de hacer públicas ellas a través de medios de comunicación social tales como el Diario El Centro el 27 de diciembre de 2017 y el video del sitio web www.eldesconcierto.cl del 4 de enero de 2018.

Lo anterior entonces, en opinión del Fiscal del caso y de la autoridad administrativa, constituyó una vulneración de las obligaciones que impone su función, existiendo negligencia en el deber de resguardar el prestigio institucional de la Universidad, incumpliendo el principio de legalidad y oportunidad de las actuaciones y obligaciones contempladas en el artículo 8 de la Ordenanza General del Académico.

Respecto al segundo cargo formulado, en relación al incumplimiento del artículo 27 del Estatuto de la Universidad de Talca, referido a derechos y deberes académicos, se desprende de la formulación de cargos -en el marco del referido sumario- que se le reprochó al Sr. Manuel Pizarro, emitir juicios de que el cuerpo académico regular de la Universidad de Talca, constituía “casi una guardia pretoriana”. Dicha afirmación, de acuerdo a la formulación de cargos deducida -en concepto del SR. Fiscal-, distorsiona la realidad, ya que es un dato objetivo de carácter histórico que la guardia pretoriana



era un cuerpo armado al servicio del emperador y destinado a su defensa personal. En tal sentido el término “guardia” según determina el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere a un “conjunto de soldados o gente armada que asegura la defensa una persona o de un puesto” y el calificativo de pretoriana, como la defensa del señor Manuel Pizarro reconoció en el escrito de descargos, se remite al cuerpo armado que defiende al emperador, lo que implica establecer que el cuerpo académico regular de la Universidad de Talca, constituye un grupo, supuestamente, que tiene como objetivo la defensa de la autoridad máxima de la universidad, vale decir, el Rector, siendo además una elite privilegiada.

Lo anterior, según lo estimo el Fiscal y la autoridad universitaria constituyó un juicio ofensivo a la dignidad de quienes componen dicho cuerpo académico, órgano vertebral de toda la actividad académica de la universidad, cuyos miembros ingresan por un concurso público de antecedentes y oposición y que realiza las funciones docentes de pre y postgrado, de investigación, de relación con el medio, de apoyo científico y tecnológico al desarrollo de procesos productivos, entre otras, en base a compromisos de desempeño y procesos de calificación académica periódicos, cuya actividad se rige por la Ordenanza General del Académico y el Estatuto de la Universidad de Talca, siendo este último un cuerpo normativo de jerarquía legal que no puede ser alterado por voluntad unilateral de la Universidad, sino sólo por una ley de la República.

Así, según se estimó en el sumario, el calificativo de guardia pretoriana atribuido a dicho cuerpo académico constituyó una expresión difamatoria del mismo, lo que a su vez, es falso y claramente desproporcionado y distorsionado, no existiendo prueba alguna presentada por la defensa del señor Manuel Pizarro que acreditara tal calificativo, lo cual -según se estimó en el sumario- constituye una afirmación imprudente y descalificatoria, la que se presenta a la opinión pública y que afecta el prestigio académico de la Universidad de Talca, dando por tanto paso al resultado del tramitado sumario administrativo.

Asimismo, en el video que se socializó en la página web, www.eldesconcierto.cl, que circuló desde el 4 de enero de 2018, el Sr. Manuel Pizarro, entregó una afirmación sobre un hecho que es el proceso calificadorio del cuerpo académico regular de la Universidad, señalando: “Las evaluaciones tienen un problema de que no hay una pauta definida, hay una pauta muy global que solamente por la lucha de la asociación de académicos que me tocó a mí ser su primer Presidente, en los años 2007, 2008 ... 2006, perdón.. Entonces si no fuera por esa lucha no tendríamos nada, pero no hay una pauta establecida y eso a muchos académicos les molesta y hay una suerte de



indefensión". Ello constituyó un relato de hechos, vale decir, una información, no una opinión, que se debe conectar con lo antes explicitado, en tanto nuestro ordenamiento jurídico nacional e interamericano determina el estándar de que la libertad de información constituye una facultad de las personas a expresar juicio de realidad, los cuales deben ser veraces y de relevancia pública, sin censura previa, por cualquier medio o forma, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores.

Sobre este punto, la fiscalía solicitó el 5 de julio de 2018, como medida para mejor resolver, enviar oficio a la Secretaria General de la universidad para que hiciera llegar resoluciones universitarias referentes al proceso de calificación académicas de profesores del cuerpo académico de la Universidad de Talca y las que regulan los Comités de Calificación de Facultades e Institutos de la Universidad de Talca, como asimismo, los que regulan la Comisión Superior de Calificación, los cuales fueron remitidos por oficio de fecha 9 de julio de 2018.

La Pauta de Evaluaciones para la calificación del cuerpo académico regular está fijada por Resolución Universitaria N° 1065 de 3 de agosto de 2015, a la que se refiere la Ordenanza General del Académico de la Universidad de Talca, en su artículo 52, inciso final y ella opera alineada con el compromiso de desempeño del académico acordada con su Decano o Director de Instituto. Lo que permite constatar la existencia objetiva de esa pauta de evaluación del cuerpo académico regular de la Universidad, que establece criterios cualitativos y cuantitativos. Así no corresponde a la verdad la declaración formulada por el Profesor Pizarro de que ella no existe, como lo determinó en su declaración en el video ya individualizado.

En este caso concreto la información proporcionada por el Sr. Manuel Pizarro en www.eldeconcierto.cl, el 4 de enero de 2018, a la opinión pública, constituyó - a juicio del Fiscal y la autoridad universitaria- una afirmación imprudente, parcial y distorsionada de la realidad, una manipulación de la misma, la que afecta directamente, que como tal genera una imagen falsa del proceso de calificación de los académicos de la Universidad de Talca en la opinión pública, ya que es el mismo Sr. Pizarro que conoce y omite referirse a la Resolución Universitaria N°1.065 de 3 de agosto de 2015, promulgada por Acuerdo N°1,800 del Consejo Académico de la Universidad de Talca, y por la Resolución Universitaria N°912 de 7 de julio de 2015, promulgada por Acuerdo N°1.475 de la Junta Directiva de la Universidad que determina el Reglamento de los comités de Facultad y de Institutos y Comisión Superior de Calificación de la Universidad que fija su texto refundido, y que regula los integrantes de los Comités de Calificaciones de cada Facultad e Instituto de la Universidad y la integración de la Comisión Superior de Calificación de la Universidad,



que actúa de acuerdo con las pautas determinadas por la Resolución Universitaria N°1.065 de 3 agosto de 2015.

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que cualquier lectura objetiva de las resoluciones universitarias ya mencionadas, NO permiten sostener a un académico de la Universidad de Talca, como el Sr. Pizarro, en enero de 2018, tres años después de que rigen tales normas, de que “no hay una pauta establecida” para realizar los procesos calificatorios del cuerpo académico regular.

8. - De todo lo expuesto, es lógico concluir que las afirmaciones que emitió el Sr. Pizarro no están cubiertas por la libertad de información como derecho fundamental, pues no existe el derecho a desinformar en nuestro ordenamiento jurídico.- Así las cosas, es el instrumento de fijación de responsabilidades administrativas ya sea en su vertiente de investigación sumaria o sumario administrativo, el único que otorga las garantías que el actor aquí pareciera echar de menos.- Son estos instrumentos, establecidos por la ley, los idóneos para determinar eventuales responsabilidades administrativas para las faltas fijadas por el artículo 27 del Estatuto de la Universidad de Talca, referido a derechos y deberes académicos, y el artículo 8 de la Ordenanza General del Académico que establecen el deber de resguardar el prestigio de la institución.-

Así las cosas, no existió en ningún momento una infracción o vulneración al derecho del Sr. Pizarro a emitir su opinión, pues de los hechos que constan en el proceso sumarial y de lo expuesto en la presente contestación, existió a los menos una conducta que ameritó la formación de un proceso que es precisamente el instrumento procesal que por antonomasia otorga las mayores y mejores garantías al funcionario cual es el sumario administrativo; se establezca o no responsabilidad.-

Nadie ha dicho S.S., y ello no puede razonablemente sostenerse, que por el hecho de iniciar un procedimiento este necesariamente vaya a desencadenar en alguna responsabilidad. - Como sabemos, ello es propio de la competencia de quienes han de evaluar el mérito de los hechos, el Fiscal sumariante y la autoridad llamada a aplicar la sanción.-

9. - Finalmente, y para que S.S. lo tenga presente, el Sr. Pizarro haciendo uso de los mecanismos procesales pertinentes, interpuso reclamación de ilegalidad ante la Contraloría Regional del Maule. En dicha sede administrativa, no obstante se dispuso retrotraer el proceso sumarial, se establece claramente que el Sr. Rector estaba mandato para instruir el señalado sumario, sin que aquel acto pudiera llegar a considerarse como un acto de acoso u hostigamiento.

Lo planteado en este apartado ratifica lo expuesto anteriormente, y es que no hay



afectación de ningún derecho fundamental alegado por el Sr. Pizarro, siendo lo mandado a corregir por la Contraloría Regional un aspecto meramente formal.-

A. Segundo sumario administrativo.

1. - Con respecto al segundo sumario administrativo incoado en contra del Sr. Pizarro, en el cual aduce que se le lesiona su derecho a la honra, en tanto se está buscando su descredito personal y académico, no se mencionan correctamente los hechos que dieron lugar a dicho sumario, así como tampoco se puede llegar a considerar que el mismo está generando la vulneración de derechos fundamentales, toda vez que ni siquiera se ha resuelto el sumario por la autoridad competente, pues primero que todo no se sabe el resultado del mismo - ya que se le puede absolver de los cargos-, o incluso ubicándose en el peor de los casos y se le considera como responsable de un actuar incorrecto, tiene una serie de recursos procesales que puede impetrar.-

2. - Así las cosas, y respecto a los hechos denunciados por el Sr. Pizarro, debemos señalar que efectivamente fue él mismo quien puso en conocimiento del Decano de la facultad de Ciencias Forestales, que la estudiante doña Kriss Alarcón había sustraído una evaluación desde su computador, aprovechando un descuido suyo, enterándose a través de un sistema de seguridad que tiene en su equipo, detectando que la evaluación había sido remitida a la cuenta de la estudiante, enfrentándola. Este hecho fue investigado primeramente por el Profesor Darío Aedo en el marco de la Ordenanza sobre Conducta Estudiantil.

Fue entonces que en el contexto de aquella indagatoria, que el Presidente del Tribunal de Disciplina, don Gonzalo Salinas, puso en conocimiento de la autoridad que la estudiante había dejado en evidencia un eventual abuso de autoridad por parte del Sr. Pizarro. Aquel abuso habría consistido en que luego de haberse enterado de la sustracción de la evaluación (decidiendo no aplicarla y reemplazarla por otra), al hablar con la estudiante la conminó a pedir perdón a los estudiantes, además de decirle que tenía que irse de la Universidad porque él tenía el poder para expulsarla (cuestión totalmente improcedente, ya que aquello sólo puede ser consecuencia de un sumario por conducta estudiantil). Acto seguido a lo expuesto, el Sr. Pizarro le habría exigido que redactara una carta de disculpas cuyo contenido él mismo corrigió y visó, forzándola a disculparse y exponerse públicamente. Todo lo cual la estudiante padeció, señalándoselo al Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.

3. - A raíz de la situación informada por el Presidente del Tribunal de Disciplina, don Gonzalo Salinas, se instruyó un procedimiento disciplinario a cargo del Profesor Carlos Padilla, que luego de haberse tramitado propuso el sobreseimiento.



Sin embargo, cuando remitió su informe al Rector, se advirtió la existencia de diligencias necesarias que no habían sido decretadas.

Al encontrarse en dicha situación el Sr. Rector, haciendo uso de las facultades entregadas por ley, procedió a elevar la investigación sumaria a sumario administrativo pese a la propuesta de sobreseimiento, pues como es sabido la investigación sumaria no admite prórroga de plazo, por lo que advirtiendo la necesidad de decretar nuevas diligencias, una vez vencidos los 5 días de una investigación sumaria, la única alternativa es que se eleve a sumario administrativo. Así entonces, ordenada la reapertura se asignó como fiscal a cargo al Sr. Raúl Carnevali, de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

4. - Conforme a lo expuesto, es que no se vislumbra ningún tipo de infracción o vulneración de garantías fundamentales, pues ante tales antecedentes lo mínimo es efectuar una investigación a fondo, usando todos los recursos autorizados por nuestro ordenamiento jurídico, no olvidando que el Sr. Pizarro goza igualmente de todas las garantías que le entrega el proceso administrativo, los cuales en ningún momento se le han negado.

Será el producto de la propia investigación y la decisión de la autoridad competente -el Sr. Rector de la Universidad de Talca- que darán cuenta de los hechos denunciados, pues debido al principio de inocencia -aplicable a los procedimientos en sede administrativa- no se puede ver conculcado ningún derecho del Sr. Pizarro por la sola existencia de la investigación,-

B.3 Tercer sumario administrativo.

1. - Ya refiriéndonos al tercer sumario incoado en contra del Sr. Pizarro, en el cual de acuerdo a la demandada del actor se estaría vulnerando su derecho al respeto a la vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y su derecho a la integridad psíquica, consideramos por nuestra parte que yerra el Sr. Pizarro al imputar a mi representada aquella vulneración de derechos, pues el actuar de mi representada siempre ha sido conforme a derecho.-

2. - Este sumario se inicia, efectivamente, por la denuncia escrita presentada por el Sr. Zamudio en contra del Sr. Pizarro, ambos miembros de la misma Facultad, y luego de una discusión producida en la oficina entre ambos, el Sr. Zamudio decide comunicar el hecho a la autoridad para que se investigue, pues estimó que la conducta del Sr. Pizarro ya es reiterada en el tiempo y que su conducta altera el clima laboral.-

En aquella denuncia, se aduce por parte del Sr. Zamudio, que el Sr. Pizarro calificó de “verdaderos delincuentes y criminales al Rector y al Director de Asuntos Jurídicos”,



dando cuenta además de una gran cantidad de impropiedades e insultos a varios profesores y funcionarios de la Universidad.-

3. - Este sumario administrativo, se encuentra -al igual que el anterior- aun en estado de reservado, en la etapa conclusiva, el Fiscal emitió su vista y está a la espera de la resolución de la máxima autoridad, por lo que al igual que el caso anterior, y sin resultados en dicho sumario, es imposible que el actor pueda razonablemente sentirse amagado en sus garantías constitucionales.-

4. - En definitiva, es insostenible pretender protección en esta sede, por cuanto el uso de los mecanismos establecidos por la ley para deslindar responsabilidades, es precisamente una acción de cumplimiento al ordenamiento jurídico, y no al revés como pareciera pretenderlo.-

De modo entonces el actuar de mi representada se ha limitado simplemente a dar el curso legal pertinente a una denuncia formulada por el Sr. Zamudio, y así mi representada se ha encargado de darle la tramitación que en derecho procede y aplicar los procedimientos necesarios. Ante una denuncia que cumple con las formas de tal arbitrio procesal lo que corresponde es investigar, no olvidando que el Sr. Pizarro tuvo y tiene asegurada todas las garantías entregadas por la ley.

Y es que con respecto a las denuncias, debe señalarse que es política de la universidad el utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico confiere para la investigación de los hechos respecto de los cuales toma conocimiento la autoridad y que pueden revestir responsabilidad administrativa. En efecto, durante el año 2018 se iniciaron 58 indagatorias (sumarios administrativos, investigaciones sumarias y sumarios en el marco de la ordenanza sobre conducta estudiantil).- Así, no es al Sr. Pizarro a la única persona que dentro de una gran institución como es la Universidad de Talca, se la tiene en condición de sumariado.-

5. - Conforme a lo expuesto, es que no se vislumbra ningún tipo de infracción o vulneración de garantía fundamentales, pues ante tales antecedentes lo mínimo es efectuar una investigación a fondo, usando todos los recursos autorizados por nuestro ordenamiento jurídico.

Será el producto de la propia investigación y la decisión de la autoridad competente -el Sr. Rector de la Universidad de Talca- que darán cuenta de los hechos denunciados, pues debido al principio de inocencia -aplicable a los procedimientos en sede administrativa- no se puede ver conculcado ningún derecho del Sr. Pizarro por la sola investigación.-

B. Invisibilización comunicacional.

1. - No obstante, la precaria información contenida en la demanda del Sr.



Pizarro, igualmente procederemos a hacernos cargo de las imputaciones formuladas en este extremo, negándolas desde luego. No existe una invisibilización del actor, ni menos un actuar que pudiese considerarse reprochable en términos tales de dar amparo a la pretensión del actor.-

2. - Con respecto a la Dirección de Comunicaciones, la Directora de aquel departamento, tiene plena libertad para decidir el contenido de los programas y publicaciones, con la única limitación de ajustarse a temas de interés corporativo y que no sean contrario a la moral y al bien público. En tal contexto, el criterio que define la elección de noticias es estrictamente periodístico y no se somete a la revisión del Rector y de ningún otro.

3. - Tal es el grado de inexactitud del libelo de la demanda, que se olvida que es la propia Universidad la que propicia que el actor junto a su equipo cuenten con su propia página web -repositorio digital del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental-, en donde tienen plena libertad para hacer sus publicaciones y dar cuenta a la comunidad de sus avances y noticias. Las noticias y contenidos son remitidos por el propio Sr. Pizarro o por quien él designe, siendo derivados a doña Liliana Guzmán, Directora de Comunicaciones, quien es quien deriva al resto de las plataformas comunicacionales.-

Imposible resulta entonces S.S. pensar que el Sr. Pizarro es invisibilizado comunicacionalmente, cuando se encuentra totalmente vigente su principal medio de comunicación y exposición, todo bajo el alero de mi representada, Universidad de Talca.-

C. En cuanto al derecho.

b. Sumarios cursados contra el sr. Pizarro se encuentran conforme a derecho. imposibilidad que exista vulneración de derechos.-

1. - Más allá de lo dicho en torno a las garantías que el recurrente denuncia como conculcadas, lo cierto es que el actuar de mi representada se apega estrictamente a lo que en derecho corresponde, que constituyen elementos base en el caso sub-lite.

2. - En cuanto a las supuestas infracciones emanadas por los sumarios administrativos cursados en contra del Sr. Pizarro, ha de hacerse presente que se han respetado todos los aspectos pertinentes al procedimiento de sumario administrativo llevados en contra de él, tales como la citación a declarar al sumario administrativo, la notificación de la formulación de cargos efectuada por el fiscal, notificación del acto administrativo que establece la sanción (en el caso del primer sumario).- Tanto es así que el sumariado ha ejercido plenamente su derecho a defensa.-



3. - El recurrente estima que se ven vulnerados distintos derechos fundamentales por el mero desarrollo de los procedimientos administrativos. Ante eso se debe recordar que al ser la Universidad de Talca un organismo público, se rige por sus normativas, dentro de los cuales está la Ley N° 18.834 que crea el Estatuto Administrativo y que es precisamente el arbitrio establecido para determinar responsabilidades.-

El Sr. Pizarro hace una observación individual de cada derecho vulnerado por cada sumario incoado en su contra, buscando que S.S. vea un supuesto trasfondo, que desde el punto de vista del actor constituye acoso laboral.-

Pues como fue relatado en el apartado de los hechos, en cada sumario existieron antecedentes lo suficientemente fundados para iniciar los correspondientes procedimientos, los cuales siguieron su curso procesal y aseguraron al Sr. Pizarro la totalidad de garantías procesales existentes. No se le puede imputar a mi representa los hechos sobre los cuales se han cursado dichos procedimientos, pues el haber omitido cursarlos hubiera tenido como consecuencia ir en contra de mandato legal y no cumplir con la normativa vigente.-

Cada uno de los actos administrativos que componen el sumario, se realizaron con la fundamentación que corresponde, siendo respaldados por los antecedentes que surgieron en la etapa indagatoria, los que darán a luz los respectivos resultados, tanto en favor como en contra del Sr. Pizarro. Esta instancia no puede ser utilizada S.S. como un medio de impugnación de procedimientos administrativos.-

4. - Respecto a lo señalado, es que queda de manifiesto el fiel cumplimiento a la normativa establecida en el estatuto administrativo y las normas procesales que componen los sumarios administrativos, respetándose el debido proceso, el respeto a la debida defensa material y acceso a un justo y racional procedimiento, teniendo como consecuencia de lo mismo el respeto al resto de las garantías fundamentales del Sr. Pizarro.

Y es al tenor de lo anterior, que habiéndose realizado todos los procedimientos conforme a derecho, que no pueda aspirarse que esta instancia jurisdiccional modifique o anule actuaciones plenamente válidas.

Es así que respecto a la supuesta ilegalidad e infracción a garantías fundamentales, se debe considerar por S.S. que lo posiblemente imputable a esta parte es el actuar en los respectivos procedimientos administrativos y de los actos que componen el mismo, constando S.S. que no existe ni ha existido, atisbo alguno de animadversión o inclinación que pudiera mover o motivar una conducta alejada de la recta razón y de lo establecido en la Ley. En la especie, lo alegado por el Sr. Pizarro son los



antecedentes que dan curso a los respectivos procedimientos, siendo aquellos los que a su vista le generan una vulneración de sus derechos fundamentales.

Los respectivos procedimientos vienen al amparo del Sr. Pizarro, pues al existir hechos difusos y que requieren dilucidar si existe o no responsabilidad administrativa, se inician y entregan innumerables garantías, velando siempre por el principio de inocencia y la posibilidad de dilucidar aquellos hechos, no siendo por tanto imputable a esta parte la generación de infracciones o vulneraciones a los derechos fundamentales.-

C. La improcedencia de demandar daño moral.-

1. - Ante lo solicitado por el Sr. Pizarro en su demanda de tutela laboral, se debe considerar por S.S. la improcedencia de decretar la existencia de daño moral en un procedimiento de tutela laboral, más aun cuando la relación laboral se encuentra aún vigente.- El actor, en búsqueda de la “reparación del daño moral causado”, solicita a S.S. que se nos ordene pagar una indemnización, en conformidad -como consta en la página 38 de la demanda- a lo que dispone el artículo 489 inciso 3.

El recién aludido artículo en sus primeros tres incisos, nos señala que:

Artículo 489.- Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485, se hubiere producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por la vía del procedimiento regulado en este Párrafo, corresponderá exclusivamente al trabajador afectado.

La denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta días contado desde la separación, el que se suspenderá en la forma a que se refiere el inciso final del artículo 168.

En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

De acuerdo a lo expuesto, queda claro el tenor de la normativa citada por la parte demandante, situando la indemnización solicitada como procedente sólo en el contexto de que sea con ocasión de despido vulnerando derechos fundamentales, cuestión que en este caso en concreto NO sucede, pues el actor mantiene su vínculo plenamente vigente con mi representada. Lo que a contrario sensu, no es pertinente en la hipótesis de una relación vigente, como acontece en el caso de marras. Como se ha manifestado, el fallo antes transcrito sigue el mismo razonamiento sostenido por



esta parte, en el sentido que encontrándose vigente la relación funcionaría -o estatutaria- entre el actor y mi representada, es la propia ley la que establece la improcedencia de pagar suma de dinero alguna a título de daño moral por aplicación del artículo 489 del Código del Trabajo, que restringe el pago de indemnizaciones para aquellos casos en que exista “despido”.

En efecto, lo planteado por la parte demandante infringe normas expresas, toda vez que se ha accionado en procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales por supuestos hechos vulneratorios de garantías ocurridos durante la relación estatutaria que une al Sr. Pizarro con la Universidad de Talca, situación que corresponde a aquella definida en el artículo 485 del Código del Trabajo, que no contempla el pago de indemnización alguna al accionar en procedimiento sobre tutela laboral encontrándose vigente la relación laboral.

4. - Así, como se puede advertir de la simple lectura del artículo 485 del Código del Trabajo, el objetivo central del procedimiento de tutela en este caso, o sea, cuando se trata del supuesto de tutela estando vigente la relación laboral, es lograr el cese de la conducta lesiva, más no una reparación pecuniaria.

Por su parte el artículo 489 del citado Código, que se refiere a la tutela que ocurre con ocasión del despido, dispone que estando en aquella situación se vulneran derechos fundamentales, se puede condenar al infractor a pagar indemnizaciones que allí se contemplan, entre las que no se encuentra la indemnización por daño moral.

En conexión con lo expresado, el artículo 495 del Código del Trabajo, en su N°3, al referirse que el juez puede adoptar las medidas conducentes a la reparación del trabajador, “incluidas las indemnizaciones que procedan”, está referido a las indemnizaciones que expresamente prevé el artículo 489, entre las cuales, como se ha señalado, no está el pago de una indemnización por daño moral, tal como lo señala el fallo citado.

5. - En perfecta concordancia con lo expuesto, y para un mayor abundamiento, es del caso señalar que la improcedencia de la reparación del daño moral en el marco de un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, deriva de la historia fidedigna del establecimiento de las leyes N° 29.087 y 20.260 que incorporaron el nuevo procedimiento laboral que contempla el procedimiento de tutela laboral, tal como fue enunciado y desarrollado en el apartado B.3 título I, de este escrito, sobre cuestiones previas.

6. - De acuerdo a todo lo expuesto, se deduce que si no hay despido -como en este caso- no procede el pago de las indemnizaciones establecidas en el artículo



489 del Código del Trabajo, ni tampoco ninguna otra ya que no se está en presencia de una acción propiamente indemnizatoria.

Finalmente, y parafraseando el fallo citado, debe tenerse especial consideración -tal como ha sostenido la E. Corte Suprema- que las indemnizaciones consagradas por la ley laboral están expresamente regladas, razón por la cual no corresponde aplicar otras distintas a la que dicha legislación especial prevé, y que las resarcitorias del despido injustificado son las sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, contemplándose en la norma del 489 del Código del Trabajo un caso especial de indemnización, proveniente del daño provocado al trabajador con ocasión de su despido que se haya producido con vulneración de determinados derechos fundamentales, situación fáctica que no corresponde a este caso habida cuenta que la relación funcionaría se encuentra actualmente vigente, por lo que necesariamente se excluye la indemnización por daño moral en los casos en que se mantiene la relación funcionaría, pues sobre esta materia existe la expresa y especial norma del artículo aludido, que prima sobre toda otra norma y que circunscribe el pago de indemnizaciones solo a los casos de despido con vulneración de garantías.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 452 y siguientes del Código del Trabajo, demás normas que en derecho correspondan, solicitó tener por contestada la demanda deducida en autos en contra de mi representada, y en virtud de los fundamentos expuestos, rechazar la demanda intentada acogiendo una o más de las excepciones o defensas opuestas por mi parte, con costas.-

Que estando dentro de plazo y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, vengo en contestar la demanda de cobro de asignación de exclusividad formulada en autos en contra de mi representada, Universidad de Talca, solicitando el rechazo de la misma, con costas, atendido a los siguientes fundamentos:

I. Cuestiones previas: incompetencia del tribunal.

A. Incompetencia del Tribunal

A.1. Incompetencia relativa.

En aplicación del principio de economía procesal, hacemos reproducción de lo argumentado en el título “I.- Cuestiones previas: inadmisibilidad de la acción, incompetencia del tribunal y caducidad de la misma.”, específicamente el punto B.1. sobre la incompetencia relativa, de la contestación desarrollada en lo principal de este escrito.-

En concordancia con lo allí expuesto, estimamos que esta acción debe ser conocida por el Tribunal con competencia en lo laboral de la ciudad de Talca.-



A.2. Inaplicabilidad del Código del Trabajo a los funcionarios públicos de la Administración del Estado: Incompetencia en relación a la materia.-

En aplicación del principio de economía procesal, hacemos reproducción de lo argumentado en el título "I.- Cuestiones previas: inadmisibilidad de la acción, incompetencia del tribunal y caducidad de la misma.", específicamente el punto B.2. sobre la incompetencia en relación a la materia, de la contestación desarrollada en lo principal de este escrito. Lo anterior debe ser vinculado al hecho que no es aplicable el Código del Trabajo a los hechos suscitados entre la administración y sus funcionarios.-

Así, entonces, estimamos que por existir una relación de derecho administrativo, toda vez que ese es el vínculo que liga a las partes, el tribunal con competencia en lo laboral no tiene competencia para conocer de la pretensión que pretende enderezar la demanda.-

A.3. La petición de pago de remuneraciones no es materia de este procedimiento.

1. - La "nueva justicia laboral" implementada por la Ley N°20.087 contempla la denominada acción de tutela laboral cuya finalidad central es la protección de los derechos fundamentales del trabajador de naturaleza no laboral, tales como la intimidad, la libertad de expresión o la honra.

El proceso de tutela de derechos fundamentales de los trabajadores es un procedimiento especial previsto actualmente en los artículos 485 y ss. del Código del Trabajo. Este procedimiento, como se sabe, implicó la incorporación efectiva de la protección judicial, en sede laboral, de los denominados "derechos fundamentales inespecíficos" de los trabajadores, estableciéndose como un mecanismo de resguardo especial y privilegiado de amparo de sus derechos frente a las facultades del empleador. De esta manera, y sin perjuicio del procedimiento previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República (Recurso de Protección) -pero estableciéndose una incompatibilidad con éste, en ciertos casos-, el Código del Trabajo configura su propio procedimiento de competencia del juez laboral, y en el que el trabajador puede demandar la protección de ciertos derechos fundamentales, además de incoar otras acciones judiciales complementarias.

2. - En caso que el tribunal considere que se ha vulnerado un derecho fundamental de trabajador, podrá ordenar lo siguiente: de persistir el comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del fallo, exigir su cese inmediato, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del art. 492 C. del T.; la indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos



fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492 C. del T., incluidas las indemnizaciones que procedan; la aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas de este Código (cfr. 495 CdT).

3. - De este modo, nos encontramos con que la pretensión del pago de remuneraciones no es un derecho inespecífico resguardado por la acción de tutela de derechos fundamentales, sino más, se enmarcaría - en el caso de que se estime aplicable el Código del Trabajo a la relación contractual que liga a las partes- en un cobro de prestaciones que debe ser demandado por medio del procedimiento de aplicación general.

Así las cosas, SS no podría pronunciarse sobre esta materia, por no ser de aquellas que deben ser conocidas en un proceso de tutela laboral.

II. En subsidio: contestación de la demanda de cobro de asignaciones.

a.- Antecedentes de la demanda de autos.

1. - Como relata el actor en su demanda, a comienzos del año académico de 2017 recibió una nota de la Sra. Ximena Letelier del Departamento de remuneraciones de la Universidad de Talca, dando cuenta de que en el mes de abril no se le pagaría la asignación de exclusividad por no cumplir con el requisito de horas para tales efectos - sólo hacía 5 horas de docencia a la semana-.

2. - De acuerdo expresa el Sr. Pizarro, al no haberse repuesto aquella asignación, con fecha 5 de diciembre del año 2017 remitió carta, vía correo electrónico, al Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Talca, explicando que le concurrían todos los requisitos para recibir dicha asignación, planteando además que su posible suspensión del pago se pudo efectuar por haber hecho clases en un diplomado de la Universidad de Chile.-

3. - Con fecha 7 de diciembre de 2017, le responde el Director de Asuntos Jurídicos al Sr. Pizarro, precisando justamente que el motivo del no pago de la asignación de exclusividad es por haber hecho clases en el programa de diplomado de la Universidad de Chile.-

4. - Luego de dar cuenta de una serie de correos electrónicos, termina señalando el actor que hasta la fecha de la presentación de la demanda no se le ha pagado la asignación de exclusividad, la cual debió pagarse entre abril de 2017 y febrero de 2018, agregando que esto fue realizado de manera arbitraria y sin razón jurídica.-

5. - Agrega finalmente el actor, que si pese a que inicialmente pudo existir un error para estimar que la asignación no era procedente, pudo acreditar que cumple más de 6 horas semanales de docencia directa y que su función en el diplomado de la



Universidad de Chile es en el marco de un convenio de colaboración entre las universidades, por lo que no le afectaría para recibir su asignación de exclusividad.-

B. Contestación propiamente tal.

1. - En cuanto a los hechos demandados, y para el caso de que S.S. se estime competente para conocer de esta materia, venimos en señalar la total improcedencia de lo demandado, pues mi representada nada le debe, todo de acuerdo a la aplicación del marco jurídico correspondiente.-

2. - Con respecto a esto, se debe tener en cuenta la Resolución Universitaria N°1895/2016, que fija el valor de la asignación de exclusividad para el personal académico de la planta regular de la Universidad de Talca, año 2017, la cual señala que se pagará en la medida que se realicen a lo menos 6 horas semanales de docencia directa en cada semestre académico o 12 horas semanales de docencia directa en un semestre académico en el año 2017, pudiéndose desarrollar aquellas actividades tanto en pregrado como en doctorado.

Lo anterior, se debe complementar con lo señalado en el Decreto Universitario N°19 del año 2016, el cual en su artículo 3, regula la asignación de exclusividad, indicando -entre otras condiciones- que “el académico del cuerpo regular no podrá desarrollar actividades remuneradas de carácter académicas en otras instituciones de educación superior, agregando no obstante, que estarán exceptuadas de dicha limitación “aquellas actividades que se realizan en el marco de un convenio o alianza suscritos previamente entre la Universidad de Talca con otra institución de educación”.

3. - Es entonces que pese a la existencia del instrumento celebrado entre mi representada y la Universidad de Chile, referido a un convenio marco, este se encuentra destinado -entre otros aspectos- al desarrollo y ejecución de programas de postgrado conjuntos, por lo que un diplomado no puede considerarse dentro de aquellos, toda vez que no otorgan grado académico alguno, de manera tal que no resulta aplicable lo señalado en el apartado anterior referente al artículo 3 del Decreto Universitario N°19 del año 2016.-

4. - Así es como, de acuerdo a los mismos hechos que se encuentran asentados en el proceso, es decir, el hecho de que el Sr. Pizarro ejerció docencia en un diplomado de la Universidad de Chile el año 2017, y que dentro del convenio celebrado entre las universidades, era en consideración a postgrados, es que no se le realizó el pago de la asignación de exclusividad correspondiente a aquel año académico, no existiendo ningún grado de arbitrariedad, existiendo, en cambio, motivos jurídicos que sustentan aquello.

Por tanto, solicitó tener por contestada la demanda de cobro de asignación de



exclusividad, deducida en autos en contra de mi representada, y en virtud de los fundamentos expuestos, más los propios del tribunal rechazar la demanda intentada acogiendo una o más de las excepciones o defensas opuestas por mi parte, con costas.

Se realizaron las audiencias previstas en los artículos 453 y 454 del Código del Trabajo

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA LABORAL.

PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria, luego de la apertura del debate sobre las incidencias promovidas por la parte demandada con motivo de la alegación de inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de requisitos formales y de la interposición de las excepciones perentorias de incompetencia absoluta del tribunal en razón de materia y de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral y de la caducidad de la acción de tutela, el Juez suplente don Jorge Muñoz Escobar, rechazando las primeras de las mencionadas, resolvió dejar para sentencia definitiva la resolución de la última excepción, y, habiéndose deducido en tiempo y forma recurso de reposición en su contra, por parte de la defensa de la parte demandada, este fue rechazado por el juez de la audiencia.

SEGUNDO: Que en consecuencia corresponde a esta Juez prevenir en el conocimiento y resolución de la incidencia en esta instancia procesal, y para ello, resulta necesario a modo de introducción, señalar que la institución de la caducidad de la acción o del derecho, en términos genéricos, es un fenómeno que se presenta, cuando pasado el tiempo que la Ley señala para el ejercicio de un derecho, éste expira, quedando el interesado impedido jurídicamente para reclamarlo.

Entonces, la caducidad se produce cuando, la Ley o los particulares, señalan un término fijo para la duración de un derecho, más allá del cual no puede ser el mismo ejercitado, fijándose antemano el tiempo durante el cual un derecho es susceptible de ser ejercitado útilmente.

Que en lo concerniente al procedimiento de tutela laboral como mecanismo específico y privilegiado de protección de los derechos fundamentales, regulado en el párrafo 6° del Libro V del Título I del Código del Trabajo y respecto de lesiones a derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones jurídicas vigentes, el inciso final del artículo 486 de la citada codificación dispone, cuyo es el fundamento normativo de la excepción opuesta por la parte demandada, dispone que :”La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados



desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168”, y, este último artículo referido al derecho de impugnación del despido, y recargo a indemnizaciones dispone en su inciso final que:” El plazo contemplado en el inciso primero (sesenta días hábiles) se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”.

TERCERO: Que los fundamentos que sostienen la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada Universidad de Talca, consisten en síntesis, en que de acuerdo al capítulo I de la demanda, el actor hace reseña de cada uno de los actos constitutivos de vulneraciones a sus derechos fundamentales derivadas de las instrucciones de sumarios administrativos en su contra y en el capítulo II de la misma reseña la invisibilización en las plataformas comunicacionales de la Universidad entendiéndola como una forma de exclusión al no publicarse la adjudicación de la cátedra de Unesco sobre hidrología en el mes de abril del año 2018 y el premio que le fuera otorgado como investigador destacado el 10 de agosto de 2018 por la Corporación Chilena de la Madera y precisándose por la defensa de la parte demandada las fechas de los sumarios y la fecha de la interposición de la demanda, concluye la caducidad de la acción interpuesta.

Que por su parte, la defensa del demandante al evacuar el traslado conferido, solicitó su rechazo, basado en síntesis, en que la acción se interpuso dentro de plazo, puesto que se trata de una conducta de acoso laboral que es lo que ha motivado la demanda, no es un hecho específico sino que son conductas constitutivas de acoso que van sucediendo en el tiempo , es una conducta permanente, que no se completa en un acto específico sino que es sostenida en el tiempo que produce el daño que se ha descrito en la demanda.

CUARTO: Que precisada la controversia incidental, corresponde establecer ciertos hechos pertinentes a la materia de que se trata y que constan en autos por ser pacíficos, y otros, por encontrarse acreditados en el proceso, siendo de los primeros los siguientes:

(1.) Que el demandante don Manuel Roberto Pizarro Tapia de profesión ingeniero forestal, Doctor en ingeniería y Profesor Titular de la Universidad de Talca grado I de la Escala II Bis de la E.R.U.T. con relación laboral estatutaria vigente, interpuso demanda de tutela laboral por vulneración de sus derechos fundamentales con fecha



17 de diciembre del año 2018 ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el cual, acogiendo la excepción opuesta por la parte demandada se declaró incompetente en razón de territorio, y con fecha 8 de marzo del año 2019 este Tribunal aceptó la competencia declinada.

(2.) Que el demandante individualizado, denunció en su libelo de demanda vulneración de sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°1, N°4, N°5, N°12 y N°16 de la Constitución Política de la República, este último en relación al artículo 2° del Código del Trabajo, esto es, su derecho a la vida e integridad física y psíquica, su derecho a la privacidad y honra, su derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, su derecho a la libertad de expresión, opinión e información sin censura previa y su derecho a la no discriminación ilícita en razón de opinión, vulneraciones todas, que se habrían suscitado en un contexto de conductas de acoso laboral en las que habría incurrido la parte demandada, y, que conforme a la relación de los hechos reseñados en la demanda, consistieron en síntesis en : (a) la orden del rector de la Universidad demandada de instruir sumario en su contra con fecha 12 de abril del año 2018 por haber publicado y suscrito en el espacio periodístico “ Carta al Director” en el Diario El Centro con fecha 26 de diciembre del año 2017 un artículo de opinión crítica denominado “ Renovación de Rectores” en el contexto del proceso eleccionario de rector para el año 2018; (b) la orden del rector de la Universidad demandada de instruir sumario en su contra con fecha 27 de agosto del año 2018 por presunto abuso de poder respecto de una alumna de la cátedra del demandante que sustrajo desde su computador dos pruebas en el mes de diciembre del año 2017; (c) la orden del rector de la Universidad demandada de instruir sumario en su contra con fecha 10 de septiembre del año 2018 a causa de una carta suscrita por el profesor don Francisco Zamudio dirigida al rector dándole cuenta de una conversación privada que habrían sostenido ambos académicos, en la cual le reseña los dichos presuntamente expresados por el demandante respecto del rector don Alvaro Rojas Marín y del director de asuntos jurídicos don Ricardo Sánchez a quienes habría calificado de delincuentes; (d) en el haber sido vetado o invisibilizado en las noticias que entrega la Dirección de Comunicaciones de la Universidad con amplia plataforma en el ámbito radial, audiovisual, digital, y escrita dirigidas a la comunidad universitaria, local y regional, omitiéndose publicaciones referidas a su persona al distinguírsele por la Unesco en el mes de abril del año 2018 adjudicándosele la cátedra de hidrología de superficie de la cual es su director, siendo la primera cátedra en hidrología con dicha distinción internacional, como tampoco fue difundida la distinción que le fuera entregada en el año 2018 por la Corporación Chilena de la



Madera que lo nombra como investigador destacado del año 2017 por sus trabajos en hidrología forestal y (e) en el no pago de la asignación de exclusividad que forma parte de la escala de remuneraciones de la Universidad de Talca y que se paga a todos los académicos que imparten docencia exclusivamente en la Universidad y que cumplen con seis horas semanales de docencia directa en un semestre académico y que desde ejerce su docencia en la Universidad de Talca dicha asignación siempre le fue pagada ininterrumpidamente desde su establecimiento hasta el mes de marzo del año 2017, puesto que a contar del mes de abril del año 2017 hasta el mes de febrero del año 2018 la parte demandada suspendió dicho pago, hasta restablecerlo en el mes de marzo del año 2018.

(3.) Que también conforme al mérito del contenido relacional de los hechos de la demanda, el actor sostuvo que con el primer sumario reseñado en la letra a) del fundamento que precede, se lesiono su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin censura previa, con el segundo referido en la letra b) del fundamento que antecede se le lesiono su derecho a la honra, con el tercer sumario señalado en la letra c) del mismo fundamento se le vulneró su derecho a la vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y su derecho a la integridad psíquica, y finalmente con relación a la conducta descrita en la letra d) del fundamento anterior se le habría lesionado su derecho a la no discriminación ilícita a causa de su invisibilización en las plataformas comunicacionales de la Universidad.

QUINTO: Que con lo relacionado, procede, por ser atingente a la materia a resolver consignar ciertos hechos, que se encuentran acreditados en autos con el mérito grave, preciso y concordante de la prueba documental incorporada por ambas partes litigantes, siendo éstos los siguientes:

(1).- Mediante Resolución Universitaria N°483 de fecha 12 de abril del año 2018 se ordenó la instrucción sumario en contra del demandante y con fecha 4 de junio del mismo año el fiscal don Humberto Nogueira Alcalá le formuló dos cargos: El primero: incumplir sus obligaciones funcionarias al vulnerar el artículo 8° de la Ordenanza General del Académico de la Universidad de Talca, el cual determina su deber de contribuir a resguardar el prestigio institucional, mediante el planteamiento de sus quejas y críticas, primeramente, ante las unidades competentes de la Universidad y sus autoridades superiores, el profesor Pizarro Tapia ha incumplido el ejercicio del cargo con apego a la normativa institucional en el caso de las declaraciones emitidas por éste a través de la Carta al Director publicada del 26 de diciembre de 2017 en el Diario El Centro de la ciudad de Talca, como asimismo, el video publicado en el sitio web www.eldesconocido.cl el día 4 de enero de 2018 en el artículo titulado “ El



reportaje que deja al descubierto la profunda crisis que vive la Universidad de Talca” y El segundo: incumplimiento del artículo 27 del Estatuto de la Universidad de Talca referido a derechos y deberes académicos, cuyo numeral 3° impone como obligaciones especiales de los académicos la prudencia en sus declaraciones y acciones, ya que debe prever que el público puede juzgar a la Universidad por sus declaraciones y acciones, debiendo en todos caso ser exacto, veraz, mostrar respeto a las opiniones de los demás y ser explícito para indicar que él no es vocero de la corporación, a menos de que se haya sido comisionado especialmente para ello. El 26 de diciembre de 2017 en que se plantea en términos que pudieran considerarse pocos exactos o veraces, como lo son el ejercicio del “clientelismo a niveles impúdicos”, “listas de adherentes construidas con la presión del poder y que atentan contra la dignidad de los electores”. La Universidad como una institución “capturada indefinidamente por una persona o grupo de poder”. Asimismo, en el video del 4 de enero de 2018 en el sitio web www.eldesconocido.cl ya individualizado el empleo de las expresiones “guardia pretoriana” referida al cuerpo académico regular de la Universidad en relación a la autoridad unipersonal superior de la Universidad, las expresiones “la Universidad se debate entre la comodidad y el miedo”, la afirmación de que en la evaluación del cuerpo académico regular” no hay una pauta definida” reiterando luego” no hay pauta establecida” y que el Rector “tendría sueldos promedios de 16.4 millones promedio mensual al año”

(2).- Mediante Resolución Universitaria N°772 de fecha 25 de mayo del año 2018 se instruyó sumario contra el demandante, y a cuyo rango fue elevada, la investigación sumaria ordenada por medio de R.U.N°1429, para esclarecer la situación anormal ocurrida con la alumna de la carrera de ingeniería forestal doña Kris Alarcón Ortega, formulándose en el sumario cargos contra el demandante por parte del señor Fiscal don Raúl Carnevali con fecha 6 de diciembre del citado año 2018, consistente en haber incurrido en decisiones estimadas abusivas respecto de la nombrada alumna, al indicarle que Denia ser expulsada de la Universidad por la falta cometida, sin tener facultades para ello, y sin haber seguido previamente los canales regulares que la institución dispone. Lo anterior, determinó que la alumna tomara unilateralmente la decisión de abandonar la carrera, no solo por las aseveraciones del profesor Pizarro sobre su expulsión, sino también por sentirme afectada al haberse dado publicidad a los hechos. Se habría incurrido en el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 61 letras b) y c) de la Ley N°18.834 el que dispone: Serán obligaciones de cada funcionario: a) orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta



correspondan y c) realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución.

(3).- Mediante Resolución Universitaria N°1548 de fecha 10 de septiembre del año 2018 se ordenó instruir sumario contra el demandante, relativo a su conducta denunciada por el profesor don Francisco Zamudio Arancibia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, el señor Fiscal don Iván Palomo González le formuló con fecha 22 de noviembre del año 2018 el siguiente cargo “ emplear frecuentemente en sus comunicaciones con los demás académicos de la Facultad de Ciencias Forestales adjetivos y expresiones calificativas de connotación grosera para hacer prevalecer sus opiniones, menoscabando o menospreciando el trabajo de otros académicos al tildarlos de flojos, pencas, que valen hongo/callampa, lo que se traduce en el uso soez y desmedido del lenguaje, incurriendo en burlas en reuniones de trabajo, lo cual ha contribuido a generar un clima laboral hostil dentro de esa unidad académica, hecho que es compartido y consta de los testimonios de los declarantes que se detallan: Dr. Francisco Zamudio Arancibia (26 de diciembre de 2018, fojas 39 a la 42). Dr. Carlos Mena Frau (28 de septiembre de 2018, fojas 43 a la 47).Dr. Oscar Bustos Letelier (4 de octubre de 2018 fojas 48 a la 52). Dr. Marcia Vásquez Sandoval (4 de octubre de 2018, fojas 53 a la 59).Dr. Darío Aedo Ortiz (4 de octubre de 2018, fojas 60 a 63). Sra. María Valladares González (11 de septiembre de 2018, fojas 64 a 67) y Dr. John Gajardo Valenzuela(12 de octubre de 2018, fojas 72 a la 75). Se agrega que los hechos descritos precedentemente vulneran las siguientes normativas: Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Universidad de Talca R.U.N°595 de fecha 25 de abril de 2017; Ordenanza General del Académico R.U.N°357 de 19 de marzo de 2018, El Estatuto de la Universidad de Talca Título V Del Cuerpo Académico “ Los derechos y deberes de los Académicos” artículo 27 n°3; Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo y Ley de Universidades Estatales N°21.094.

(4.) Que en el mes de abril del año 2018 el demandante fue distinguido por la Unesco adjudicándosele la cátedra de hidrología de superficie siendo la primera cátedra en hidrología con dicha distinción internacional y en el mes de agosto del año 2018 el demandante recibió en la ciudad de Concepción el “Premio al Investigador Destacado del año 2017” otorgado por la Corporación Chilena de la Mader, por sus trabajos en hidrología forestal.

Estos hechos además de estar acreditados con las pruebas documentales atingentes, no fueron negados expresamente por la parte demandada en su escrito de contestación, al contrario fueron reconocidos.



(5.) Mediante Oficio Ord N°520 emitido con fecha 27 de febrero del año 2019 la Inspección Provincial del Trabajo de Talca informó que revisados los antecedentes de ese Servicio, no se encontraron denuncias efectuadas por el demandante don Manuel Pizarro Tapia en contra de la Universidad de Talca.

SEXTO: Que establecidos los hechos no controvertidos y los que fueron acreditados en el proceso, es necesario reafirmar la necesidad de especificar jurídicamente la naturaleza y el origen legal de la acción de tutela al interponer una demanda, en el sentido de señalar si la vulneración se produjo con ocasión del despido o durante la vigencia de la relación laboral – cuyo es el caso de marras - y en éste último caso, fijar fechas determinadas de la vulneración, no bastando para tal efecto, una referencia genérica a conductas reiteradas en el tiempo. Porque lo anterior adquiere especial relevancia, para efectos del cómputo de los plazos de caducidad toda vez que tal como se dijera previamente en el fundamento primero, el artículo 486 inciso final del Código del Trabajo, establece como plazo de caducidad para ejercer la denuncia de tutela durante la vigencia de la relación laboral, el de 60 días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegados; y el artículo 489 inciso segundo, que regula la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, fija un plazo de caducidad de 60 días contados desde la separación. En ambos casos la fijación de la fecha por el actor es determinante para la resolución del tribunal.

Se trata de un plazo fatal y de días hábiles y que se suspende por la interposición de un reclamo ante la Inspección del Trabajo, como también se ha hecho referencia en los términos del artículo 168 del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que con lo relacionado cabe precisar que la acción intentada por el demandante don Manuel Pizarro Tapia está sustentada en un presunto contexto de acoso laboral, y a este respecto este tribunal haciéndose cargo de los fundamentos esgrimidos por la defensa de la parte demandante al evacuar el traslado de la excepción de que se trata, se ve en la necesidad de precisar su definición, en primer término desde la perspectiva doctrinaria, la autora Marie France Hirigoyen lo define como “ toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o desagradando su ambiente de trabajo”. Hirigoyen, op.cit.p.19.

En similar sentido, el autor Juan Sagardoy e Icar Álzaga lo definen como “aquella conducta abusiva o de violencia psicológica que se realiza de forma sistemática en el ámbito laboral a través de reiterados comportamientos, manifestaciones o actitudes



que lesionan la dignidad e integridad de la víctima. Ha de tratarse, por tanto, de una conducta sistemática o reiterada en el tiempo para que atente contra la dignidad del trabajador y persiga que el afectado no pueda desempeñar su trabajo de la forma habitual en lo que venía haciendo hasta que se produjeron los ataques”.(Sagardoy Bengochea Juan y Alzaga Ruí Icar “La dignidad del trabajador y el acoso moral en el trabajo” Mobbing. El acoso psicológico en el ámbito laboral. Jurisprudencia Argentina Lexis Nexis 2005-II.p.70.)

Y, finalmente, indicar que a nivel normativo el Código del Trabajo recogiendo el primero de los derechos fundamentales consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, considerado como el valor espiritual inherente a la persona humana, consagra como uno de los principios fundamentales que inspiran las relaciones laborales, el respeto de la dignidad de la persona, por ello, expresamente dispone en su artículo 2° que es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral definiéndolo como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Efectuado el análisis, cabe asentar, que de conformidad con el contenido literal de la demanda, se evidencia en ella, que las conductas lesivas imputadas a la parte demandada, están clara y precisamente circunscritas a los cinco hechos reproducidos en el número 2°) del fundamento cuarto de la sentencia y respecto de cada uno de ellos, sostuvo que le provocaron vulneración de sus derechos fundamentales allí precisados.

OCTAVO: Que finalmente, con el objeto de arribar a la conclusión de la materia que nos convoca, resulta relevante recordar que la norma contemplada en la codificación laboral en su artículo 485 inciso tercero, precisa cuando se considera que los derechos y garantías son vulnerados en lo laboral, entendiéndose que éstos resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita su pleno ejercicio sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.

Entonces, conforme a los hechos pacíficos y acreditados en autos, las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales denunciados por el demandante se produjeron, cuando en el ejercicio de las facultades que las leyes especiales le reconocen a la Universidad de Talca (Ley N°18.834, D.F.L. N°36 del año 1981 y sus Reglamentos, Ordenanzas Generales y Estatutos normativos) ordenó la instrucción



de los sumarios administrativos mediante las Resoluciones Universitarias N°483 de fecha 12 de abril del año; la N°772 de fecha 25 de mayo del año 2018 y el instruido con el N°1.548 de fecha 10 de septiembre del año 2018.

Y, en lo concerniente a los hechos relativos a un presunto incumplimiento contractual en materia remuneracional por el no pago de su asignación de exclusividad y a su invisibilización por falta de publicidad de sus logros, distinciones y premios académicos en las todas las variantes de que dispone la plataforma de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad demandada, y que fueron calificados y denunciados por el actor, como actuaciones discriminatorias ilícitas dentro de un contexto de acoso laboral, aquellos acontecieron en el periodo comprendido entre el mes de abril del año 2017 hasta el mes de febrero del año 2018 – respecto del primero - y en los meses de abril y agosto del año 2018, respecto del segundo.

En consecuencia, desde las fechas antes precisadas, debe computarse el plazo de sesenta días hábiles y fatales, sin que a su respecto proceda considerarse para su cómputo la suspensión del mismo, por no haberse interpuesto por el demandante reclamo ante la Inspección del Trabajo sobre las materias denunciadas en esta sede judicial.

Por tanto, a la fecha en que se interpuso la acción de tutela ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, esto es, el 17 de diciembre del año 2018 y cuya competencia declinada fue aceptada por este Tribunal de Talca en lo Laboral con fecha 8 de marzo del año 2019, el plazo legal para deducir la acción por cada una de las vulneraciones denunciadas había transcurrido con creces, provocando con ello la caducidad de la acción y la extinción del derecho de modo automático.

Que en virtud de todos los razonamientos vertidos precedentemente, procede conforme a derecho acoger la excepción de caducidad de la acción de tutela y, en consecuencia y en virtud de ello, se omite análisis y pronunciamiento sobre el fondo.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 168, 445, 446, 452, 453, 454, 459, 485 y 486 inciso final del Código del Trabajo se declara:

I.-QUE SE ACOGE la excepción de caducidad de la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en relación estatutaria vigente, opuesta por la parte demandada Universidad de Talca, Rut N°70.885.500-6, representada legalmente por don Álvaro Rojas Marín.

II.- Que no se condena a la parte demandante al pago de las costas de la causa, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.



Manténgase en custodia la prueba documental incorporada por las partes por un plazo de tres meses contados desde la fecha en que a sentencia quede ejecutoriada, a cuyo término procederán a su retiro, bajo apercibimiento de destrucción.

Las partes quedan válidamente notificadas de la sentencia en la actuación decretada para las 13.00 horas del día de hoy 6 de diciembre del presente año 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, remítase a sus defensas respectivas vía correo electrónico.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RIT T-32-2019.

RUC N°18-4-0154386-0

Dictada por doña Lis Aguilera Jiménez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.



BYCZXGZNDW

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>